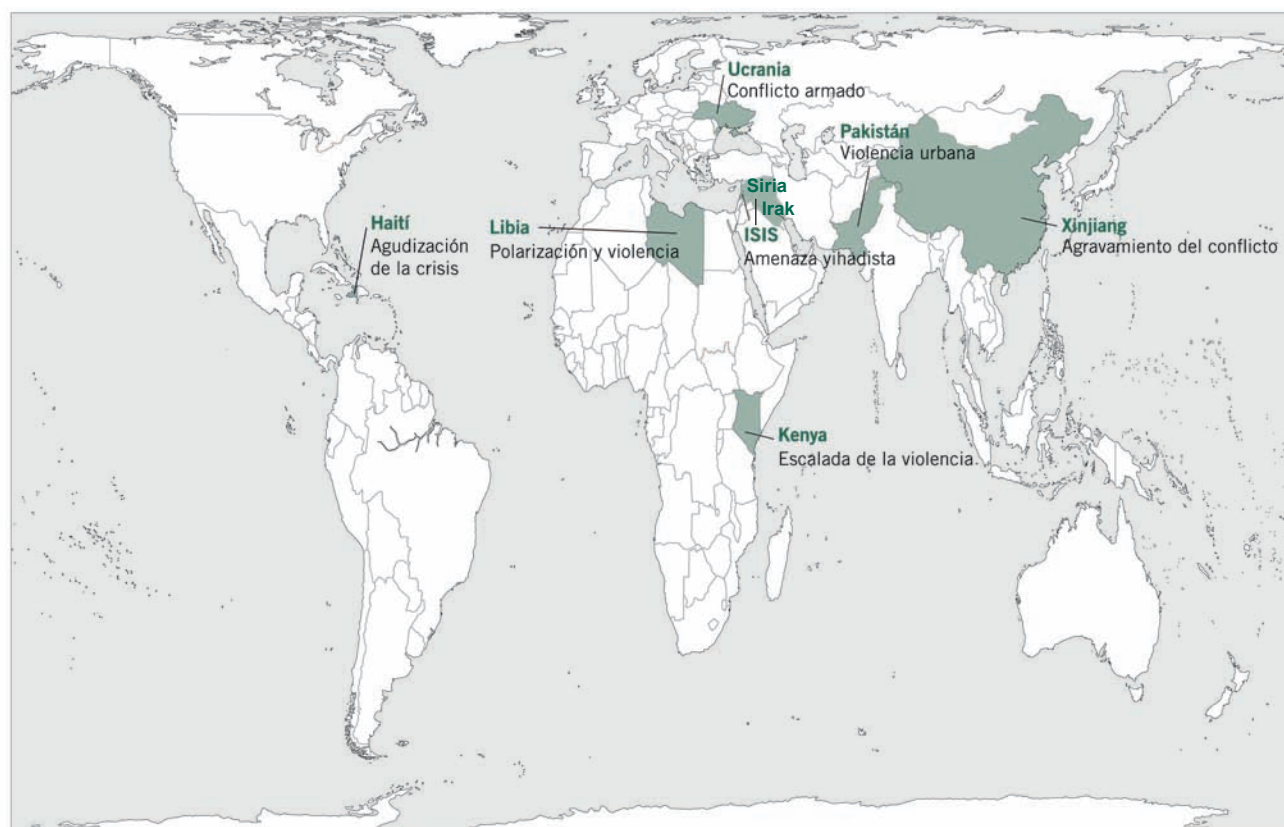


6. Escenarios de riesgo para 2015

A partir del análisis del año 2014 de los contextos de conflicto armado y tensión, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo siete escenarios que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2015. Los escenarios de alerta de cara al año 2015 hacen referencia a la amenaza de ISIS en Iraq y Siria, con los consiguientes riesgos para la seguridad humana y el impacto en el escenario regional; la delicada situación en Libia, convertida en territorio de fragmentación, fragilidad institucional y violencia creciente; la escalada de violencia en la región china de Xinjiang, que en los últimos años ha registrado un patrón de deterioro; los elevados niveles de violencia urbana en las ciudades pakistaníes de Peshawar, Quetta y Karachi, convertidas en escenario de múltiples conflictos y tensiones; las escasas perspectivas de salida ante la guerra en Ucrania; el riesgo de vacío de poder y agravamiento de la crisis institucional en Haití; y, por último, la expansión de las actividades del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia.

Mapa 6.1. Escenarios de riesgo para 2015



6.1. La amenaza de ISIS en Iraq y Siria, los riesgos para la seguridad humana y su impacto en el escenario regional

El grupo armado yihadista Estado Islámico (conocido por sus siglas ISIS o ISIL) registró un espectacular ascenso en 2014. La declaración de un califato en los territorios bajo su control en Siria e Iraq el pasado verano no sólo supuso un golpe de efecto, sino que también marcó un punto de inflexión. Después de la sorpresiva toma de Mosul (la segunda ciudad más grande de Iraq), el anuncio del líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, confirmaba las ambiciones de la organización de consolidar una entidad política en el corazón de Oriente Medio, desafiando los límites trazados por las potencias occidentales tras la derrota del Imperio Otomano a principios del siglo XX. La acelerada ofensiva de ISIS en Iraq y Siria ha tenido gravísimas repercusiones para la población civil, ha puesto en entredicho la integridad territorial de ambos países, ha obligado a potencias regionales e internacionales a nuevos cálculos estratégicos y ha alentado debates y dilemas sobre cómo hacer frente a un fenómeno complejo, que trasciende con creces los retos en el ámbito militar y de seguridad. De cara a 2015 ISIS continuará siendo señalado como una de las principales amenazas para la población y como un desafío para la estabilidad regional, y su evolución seguirá dependiendo estrechamente de cómo se gestionen los conflictos en Iraq y Siria. Previsiblemente, ISIS continuará también acaparando la atención internacional por encima de otras dinámicas de violencia que siguen desgarrando a la región.

El surgimiento y expansión de ISIS no puede dissociarse de una serie de condicionantes en Iraq y Siria. En el primer caso, su implantación se vio favorecida por la sensación de agravio y exclusión de la comunidad sunní tras la caída del régimen de Saddam Hussein (2003), una situación que se exacerbó a causa de las políticas del Gobierno encabezado por el shíi Nouri al-Maliki. En este sentido, cabe destacar que las raíces de ISIS se vinculan a la creación de al-Qaeda en Iraq (AQI) en 2004, en el marco de la contestación armada contra las fuerzas de ocupación extranjeras y de los procesos de exclusión masiva de los miembros del partido de Saddam Hussein de las estructuras de poder –“des-Baathificación”– y de desmantelamiento de las fuerzas armadas y de seguridad. El dirigente yihadista Abu Musab al-Zarqawi aprovechó este contexto para promover el establecimiento de un grupo armado radical sunní que se convirtió en la filial de al-Qaeda en Iraq. No obstante, desde un principio se produjeron tensiones con la dirección central de al-Qaeda, en parte por la preocupación ante la posibilidad de que el liderazgo se viera relegado a la periferia –frente una ascendente filial de al-Zarqawi, que demostraba un perfil independiente y capacidad de atracción de combatientes foráneos– y por la campaña de ataques de AQI contra la población shíi –al-Qaeda recelaba del impacto negativo del uso de la

violencia contra otros musulmanes de la región–, que se ha convertido en una de las señas de identidad de la organización desde su evolución de AQI a Estado Islámico.¹ La campaña de AQI contra símbolos y poblaciones shíies alentaron el clima de violencia sectaria que llevó a Iraq a sus peores niveles de violencia entre 2006 y 2007, con entre 20.000 y 30.000 víctimas mortales al año.

La evolución de AQI se vio determinada entonces por la muerte de al-Zarqawi en un ataque aéreo estadounidense (2006), por el ascenso de un nuevo liderazgo que creó el “Estado Islámico de Iraq” (ISI, por sus siglas en inglés) para evidenciar su interés en la creación de un califato, y por la campaña conjunta de EEUU con grupos armados sunníes que decidieron actuar contra AQI en parte en rechazo de sus prácticas brutales. Tras un período de debilitamiento como resultado de esta ofensiva, ISI recuperó terreno en un contexto de creciente alienación de la comunidad sunní bajo el mandato de al-Maliki, y tras el repliegue de las fuerzas estadounidenses del país (2011). La represión de las protestas pacíficas contra Bagdad favoreció un clima de radicalización y de empoderamiento de actores armados que fue aprovechado por ISI. A principios de 2014 el grupo había avanzado sobre Falluja y Ramadi, y en junio ya reivindicaba el control de Mosul, tras la huida en desbandada de las fuerzas de seguridad iraquíes.

En el caso de Siria, la penetración de Estado Islámico se vio favorecida por la militarización y radicalización del conflicto entre el régimen de Bashar al-Assad y las fuerzas de la oposición, junto con el creciente clima de tensión sectaria a nivel regional. La evolución de la revuelta contra Damasco desde una movilización popular pacífica a una guerra abierta entre una multiplicidad de actores armados propició el aumento de las hostilidades entre sunníes y shíies en toda la zona, debido a que la narrativa sobre la disputa la presentó como una confrontación entre el régimen alauí –próximo al shiísmo y a Irán– y una oposición mayoritariamente sunní. Siria se convirtió en escenario de un conflicto cada vez más internacionalizado, tras la implicación de diversos actores regionales e internacionales en la contienda a través de un apoyo político, económico y militar a diversas facciones. Entre los grupos de la oposición siria también fueron ganando terreno las organizaciones yihadistas. Entre ellas, el Frente al-Nusra, considerado la filial siria de al-Qaeda. En este escenario, ISI –bajo el liderazgo de al-Baghdadi desde 2010– vio la ocasión de ampliar sus objetivos y operaciones a Siria. En una decisión unilateral –rechazada por al-Qaeda y el propio Frente al-Nusra– ISI anunció su fusión con el Frente al-Nusra y pasó a denominarse Estado Islámico en Iraq y al-Sham, en alusión a la Gran Siria, generando el acróni-

1. Jean Pierre Filiu, *Al-Qaeda is Dead, Long Live Al-Qaeda*, Carnegie Endowment for International Peace, 22 de abril de 2014, <http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55401>, y “Le califat de la terreur”, *Afkar/Idees* N°43, Automne 2014, IEMED, Barcelona.

mo ISIS (“Daesh” en árabe) con el que se le conoce hasta hoy. A lo largo de 2014, ISIS protagonizó una serie de enfrentamientos con actores armados sirios, principalmente de la oposición. Esta actitud motivó que el grupo fuera observado con sospecha en el bando rebelde y como un grupo foráneo más interesado en avanzar en el control de territorios con el fin de implantar el califato.

Gracias a esta combinación de convulsión, sectarismo y vacío de poder, ISIS ha logrado poner en cuestión la integridad territorial de Siria e Iraq –más atribuible a los despropósitos de sus adversarios que a méritos propios, según algunos observadores.² Ya en el segundo semestre de 2014, ISIS controlaba o reivindicaba tener presencia en amplios territorios de Iraq y Siria, un área que según algunas fuentes se extendía entre 40.000 y 90.000 kilómetros cuadrados (equivalente a países como Bélgica o Jordania) y se estimaba que unos ocho millones de personas vivían bajo control total o parcial de ISIS.³ Los avances de ISIS se convirtieron en sinónimo de terror y múltiples abusos a los derechos humanos. Diversos informes de Naciones Unidas y de ONG internacionales han dado cuenta del macabro compendio de crímenes perpetrados por Estado Islámico en sus ofensivas y en las áreas bajo su control. Además de la decapitación de rehenes occidentales –que supusieron una mayor atención internacional sobre sus acciones–, se cuentan masacres y ejecuciones sumarias, secuestros masivos, un amplio uso de la violencia sexual y la esclavitud sexual, ataques indiscriminados sobre la población civil, persecución a minorías religiosas y étnicas –entre ellas shiíes, yazidíes, cristianas y turcomanas–, conversiones forzadas al Islam, destrucción de patrimonio religioso y cultural de incalculable valor, y desplazamientos forzados de decenas de miles de personas como consecuencia de sus acciones. En las zonas que están total o parcialmente bajo su control, Estado Islámico está aplicando una rigorista y excluyente interpretación del Islam sunní, imponiendo severas restricciones a la población, limitando la presencia de mujeres en espacios públicos y aplicando severos castigos corporales –latigazos, palizas, lapidaciones y hasta crucifixiones– a quienes desafían sus normas.

El uso de esta violencia desmedida constituye una estrategia deliberada de ISIS para aterrorizar a sus enemigos, forzar a la población a aceptar sus preceptos y desalentar insurrecciones. Por esta razón, desde una perspectiva de seguridad humana, la principal preocupación respecto a ISIS de cara 2015 es la situación de las poblaciones que están bajo su órbita de influencia. En este sentido, cabe destacar que una de las singularidades de Estado Islámico es que ha focalizado sus acciones en el “enemigo cercano” –más que en el “enemigo lejano” representado por estados occidentales–, y en particular contra minorías

y poblaciones shiíes consideradas infieles con la intención de reeditar un califato idealizado. Según algunos expertos, a nivel regional la inquietud se centra en la posible estrategia de expansión de ISIS en Jordania y Líbano.⁴

ISIS se ha erigido así en un nuevo modelo para el yihadismo internacional, desafiando a al-Qaeda. Tal como lo indica su nombre, la organización ha apostado por la construcción de un Estado con una estrategia deliberada y sustentándose en una organización muy definida. Con una actitud pragmática, ha evitado (o postergado) los enfrentamientos con adversarios que percibía como más poderosos o eficaces y en algunas áreas ha optado por vía de cooptación y sometimiento sin usar la violencia directa y brutal que ha aplicado en otras zonas. Desde una perspectiva económica, ISIS ha buscado auto-sustentarse y ha dedicado esfuerzos a capturar infraestructuras clave, pozos y refinerías de petróleo. Aunque al igual que otros grupos se habría beneficiado de fondos externos, la mayor parte de los recursos que maneja Estado Islámico procederían de la venta de petróleo y gas –se calcula que ISIS está ingresando entre uno y dos millones de dólares al día del comercio de hidrocarburos en el mercado negro–, del dinero obtenido en los bancos requisados en ciudades como Mosul, del comercio de restos arqueológicos, de secuestros, extorsiones, robos y del cobro de impuestos en las zonas bajo su control.

Adicionalmente, Estado Islámico ha demostrado un sofisticado manejo de las nuevas tecnologías como mecanismo de propaganda, para captar nuevos adeptos y atraer a militantes al califato. Aunque las cifras son difíciles de precisar, se estima que cerca de un tercio de los aproximadamente 30.000 combatientes que tendría ISIS en Siria e Iraq son extranjeros procedentes de más de 80 países que se han sumado a las filas del grupo en los últimos años, de los cuales unos 2.500 provendrían de naciones occidentales. Diversos análisis han apuntado que Estado Islámico se ha convertido en un reclamo potente para algunos jóvenes musulmanes sunníes desencantados, seducidos por sus promesas de victoria y salvación. De cara al futuro, sobre todo en países occidentales, existe una gran inquietud por este flujo de combatientes no sólo porque aumenta las capacidades de ISIS, sino también por la posibilidad de que estos milicianos activen células o emprendan acciones en nombre de Estado Islámico al retornar a sus naciones de origen. Adicionalmente, cabe destacar que el ascenso de ISIS ha motivado también una serie de muestras de solidaridad y declaraciones de lealtad de otros grupos armados en diversos países, más allá de Oriente Medio. Grupos como Ansar al-Sharia en Túnez y Libia; Jund al-Khilafah en Argelia; Ansar Beit al-Maqdis en Egipto; comandantes talibanes en Pakistán, y grupos armados en India y Filipinas, entre otros, han declarado

2. Peter Harling, “IS Back in Business”, *Le Monde Diplomatique*, 1 de septiembre de 2014, <http://mondediplo.com/2014/09/04/islamicstate>.

3. BBC, “What is Islamic State?”, *BBC*, 26 de septiembre de 2014, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144>; y New York Times, “How ISIS Works”, *New York Times*, 16 de septiembre de 2014, <http://www.nytimes.com/interactive/2014/09/16/world/middleeast/how-isis-works.html>.

4. Aymenn Jawad Al-Tamimi, “The Islamic State’s Regional Strategy”, *The Islamic State Through Regional Lens*, European Council on Foreign Relations, 2 de octubre de 2014, http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_islamic_states_regional_strategy326.

su fidelidad a ISIS en un intento por asociarse a la corriente yihadista de éxito. En este contexto, no es descartable que a lo largo de 2015 estas y otras organizaciones similares realicen acciones en sus ámbitos de influencia, reivindicándolas bajo la etiqueta de Estado Islámico.

En un escenario de convulsión y disputas amplificadas por los últimos años de conflicto armado en Siria –la guerra se ha convertido en una lucha existencial para potencias como Arabia Saudita e Irán y ha propiciado tensiones entre Occidente y Rusia–, la expansión de ISIS ha supuesto nuevos dilemas estratégicos para potencias regionales e internacionales. La organización ha sido identificada como un enemigo común, pero las posibilidades de desarrollar una estrategia coordinada frente al grupo se ha visto limitada por otros ejes de animadversión, desconfianzas y el interés de no favorecer a los adversarios. Aún así, en la práctica se han observado alianzas tácitas –que sólo a primera vista podrían parecer inverosímiles–, que han situado en el mismo bando, por ejemplo, a EEUU, Irán y Hezbollah en la ofensiva contra el grupo yihadista. En el caso de Siria, en tanto, el régimen ha intentado perfilarse como un aliado necesario –y en la práctica como un “mal menor”– en la lucha contra la organización, enmarcando su discurso en el combate al terrorismo.

En términos generales, la estrategia de combate a ISIS ha privilegiado la vía militar (EEUU está liderando una coalición armada en conjunción con países árabes, Irán está apoyando táctica y militarmente a los gobiernos de Siria e Iraq). No obstante, incluso aquellos partidarios y defensores de una respuesta armada al desafío de ISIS han reconocido sus limitaciones, mientras que los más escépticos han subrayado los riesgos de continuar apostando por una vía armada que –junto a los bombardeos– supone un constante flujo de armas a la región, favoreciendo la proliferación de arsenales y la espiral de violencia. Existe coincidencia entre numerosos expertos y analistas en que abordar el reto de Estado Islámico requiere una aproximación más compleja, que incluya entre otras cuestiones un bloqueo efectivo en los flujos de suministros y de tráfico ilegal que están permitiendo la implementación de ISIS –algunos observadores apuntan que una de las principales debilidades es la sostenibilidad del califato, ya que ISIS posee grandes recursos, pero no los suficientes como para mantener el funcionamiento de un Estado–; un refuerzo de las estrategias de cuestionamiento a ISIS desde el propio Islam –denunciando las atrocidades del grupo y la aberración de sus acciones desde un punto de vista doctrinal– y, sobre todo, apuntar a los factores que hicieron posible su ascenso y expansión en Iraq y Siria. Esto implica, entre otras cosas, encarar la problemática de la marginación de la comunidad sunní en Iraq y apoyar una nueva arquitectura política que asegure un esquema

más inclusivo (este es el principal reto del nuevo primer ministro, después de que Nouri al-Maliki se viera obligado a renunciar a causa de la crisis desatada por los avances de ISIS). En el caso de Siria, se requiere redoblar los esfuerzos para frenar el conflicto armado y encontrar una salida política a la severa crisis que afecta al país desde 2011. Está por verse si a lo largo de 2015 se consiguen avances en este sentido, aunque previsiblemente el escenario ofrecerá grandes obstáculos, como los que hasta ahora han impedido avanzar en una solución negociada en ambos contextos.

Finalmente, es posible prever que las acciones de ISIS continuarán estando en el foco de atención mediática internacional. Sin restar gravedad a las actividades del grupo, es relevante apuntar que existe el riesgo de que Estado Islámico favorezca una simplificación de las dinámicas de conflicto en Oriente Medio y desvíe la atención de los excesos de otros actores, igualmente preocupantes. Es necesario recordar que ISIS no es el único actor que está protagonizando abusos en la región y así lo recuerdan las recientes denuncias sobre matanzas de sunníes a manos de milicias shiíes en Iraq, ejecuciones de prisioneros por parte

de las fuerzas de seguridad iraquíes (en ambos casos en represalia por las acciones de ISIS), o las constantes denuncias de la ONU y organizaciones de derechos humanos sobre los múltiples abusos cometidos por el gobierno de Damasco y grupos de la oposición siria en el marco del conflicto armado. Algunos analistas han subrayado que, en cierta medida, la reacción internacional al desafío de ISIS puede haber enviado un mensaje problemático a poblaciones de la región. La complejidad nace de que la decisión de movilizar recursos y esfuerzos contra ISIS puede ser percibida principalmente como respuesta a la amenaza a determinadas minorías o a los intereses propios –por ejemplo, ante la decapitación de rehenes occidentales, ante el temor por el avance sobre la ciudad kurda de Erbil con amplia presencia de intereses internacionales, o la preocupación por posibles atentados–, ya que no se observó una preocupación similar pese a los graves padecimientos sufridos por millones de personas en toda la región en los últimos años. Una situación que ha estado marcada, además, por el legado de la invasión estadounidense en Iraq y el fracaso de la comunidad internacional para detener la confrontación en Siria por la vía de la negociación. Hay que recordar que más de 200.000 personas han muerto en Iraq desde 2003, que una cifra similar ha perdido la vida en Siria en los últimos tres años, y que la zona se ha convertido en epicentro de la peor crisis de desplazamiento forzado de nuestra era. El balance es lo suficientemente dramático como para subrayar la necesidad de una aproximación integral y la adopción de medidas que favorezcan una salida política y eviten que la región continúe desangrándose.

La violencia desmedida exhibida por ISIS en su estrategia de avance y control de territorios en Iraq y Siria hace temer por el futuro de las poblaciones que se encuentran dentro de su área de influencia

6.2. Libia como territorio de fragmentación, fragilidad institucional, disputas regionales y violencia creciente

La crisis política, institucional y de seguridad en Libia se agravó significativamente a lo largo de 2014, conduciendo al país a la peor escalada de violencia desde los cruentos combates que derivaron en el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi. Tres años después de la salida del poder (y de la ejecución) del longevo dictador libio, la situación en el país norteafricano se aleja radicalmente de las expectativas de estabilidad, paz y democracia que movilizaron a muchas libias y a muchos libios en el marco de las revueltas. Por el contrario, la panorámica libia se caracteriza en la actualidad por una severa polarización y fragmentación, por una debilidad institucional reflejada en la configuración de dos gobiernos paralelos, por la intensificación de los enfrentamientos entre las decenas y decenas de actores armados (formales e informales) de diverso signo, por la prevalencia de todo tipo de tráficos ilícitos y por el grave impacto de diversos tipos de violencia en la población civil. A esto se suma que algunas rivalidades regionales se están proyectando en territorio libio, convirtiéndolo en escenario de una guerra por delegación (proxy war) en medio de la convulsión que se vive en el norte de África y Oriente Medio. Este conjunto de elementos, entre otros factores, permiten anticipar que Libia constituirá uno de los principales escenarios de riesgo para 2015, teniendo en cuenta además que todos los intentos de mediación en busca de una salida negociada al conflicto han sido, hasta ahora, infructuosos, y que para prosperar deben ser capaces de sortear serios obstáculos.

Las dinámicas del conflicto en Libia continuaron caracterizándose en 2014 por una superposición de ejes de confrontación: pugnas entre sectores próximos al Islam político versus grupos seculares, lucha de leales al antiguo régimen contra “revolucionarios”, disputas entre ciudades y regiones, vinculadas también a la competencia por el control de territorios, recursos y poder, a las redes de patronazgo y a las lealtades y rencillas tribales. En este trasfondo de persistente complejidad, durante el año la evolución de los acontecimientos derivó en la conformación de dos grandes bloques rivales de poder. El surgimiento del primero de ellos estuvo vinculado a la ofensiva lanzada en Bengasi (este), la segunda ciudad del país, por el general retirado Khalifa Hifter. El militar –que desertó del régimen de Gaddafi y que pasó más de dos décadas exiliado en EEUU– emprendió ataques por tierra y aire contra las milicias islamistas que controlaban Bengasi y presentó su campaña como un intento por corregir el curso de la revolución y de asumir los desafíos de seguridad del país ante la ineficacia del Gobierno. Hifter bautizó su ofensiva como Operación Dignidad, que pasó a

aglutinar a una coalición de sectores militares descontentos, simpatizantes federalistas y tribus del este del país.

En este contexto de creciente tensión interna, nuevos acontecimientos favorecieron el surgimiento de un segundo polo de poder. Las elecciones para un nuevo Parlamento que se celebraron el 25 de junio arrojaron como resultado un retroceso para los sectores islamistas. Ante ello, una alianza de fuerzas islamistas en conjunción con grupos armados de la localidad de Misrata lanzó una ofensiva que derivó en el control de Trípoli en el marco de la denominada Operación Amanecer. La lucha por la capital incluyó duros combates por el aeropuerto de la capital libia, en manos hasta entonces de una milicia originaria de Zintan. La escalada de violencia llevó al Parlamento electo, la Cámara de Representantes, a trasladar su sede al puerto de Tobruk (oeste, cerca de la frontera con Egipto). En Trípoli, en tanto, se mantuvo en funciones el anterior cuerpo legislativo, el Congreso General del Pueblo. Así, a finales de 2014, Libia contaba con dos parlamentos, que a su vez habían elegido a dos gobiernos encabezados por el primer ministro Omar al-Hasi, en Trípoli, y por el primer ministro Abdullah al-Thinni, en Tobruk –la comunidad internacional otorgó un reconocimiento mayoritario a éste último. Tras superar algunas reticencias iniciales, el Gobierno de al-Thinni ha acabado alineándose con la coalición armada de la Operación Dignidad, mientras que el de Trípoli se apoya en la Operación Amanecer.

La inestabilidad asociada a esta lucha de poder y el incremento de las hostilidades tuvieron severas repercusiones en la población civil y motivaron la salida del país de la mayoría de los extranjeros, incluyendo todo el personal de la misión de la ONU en Libia, UNSMIL. En estas condiciones, el impacto de la crisis no ha podido ser documentado adecuadamente –lo que imposibilita conocer su dimensión real–, pero un informe de la ONU publicado en septiembre alertaba sobre una serie de tendencias altamente preocupantes que habían provocado la muerte de centenares de personas y numerosos heridos.⁵ Entre ellas, abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como ataques indiscriminados por parte de diversos grupos armados –incluyendo el uso de una gran variedad de armas en zonas residenciales de Trípoli y Bengasi–, grave daño a infraestructuras –incluyendo hospitales–, asesinatos de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, junto a detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Cifras de ACNUR a finales de 2014 indicaban que la violencia en Libia había provocado el desplazamiento forzado de unas 400.000 personas desde mayo. Según han

5. United Nations Support Mission in Libya, Office of the UN Commissioner for Human Rights, *Overview of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law during the Ongoing Violence in Libya*, UNSMIL-OHCHR, 4 de septiembre de 2014, http://www.ohchr.org/documents/countries/ly/overviewviolationslibya_unsmil_ohchr_sept04_en.pdf.

apuntado algunos analistas, la situación estaba llevando a algunos sectores de la población a preguntarse incluso si no se encontraban mejor en el antiguo régimen.⁶

Hacer frente al uso descontrolado de la violencia en el país es una tarea compleja debido a la proliferación de milicias que operan con total impunidad, a la masiva disponibilidad de armas y a las singularidades que ha adquirido el sistema de seguridad en el país. Las políticas promovidas por el Consejo Nacional de Transición que asumió el poder tras el derrocamiento de Gaddafi no consiguieron el desarme de los grupos revolucionarios y, por el contrario, crearon un sistema de complejas interconexiones entre el Estado y diversas organizaciones armadas que participaron en la revuelta. Muchas de las milicias fueron subcontratadas por diversas instancias gubernamentales, lo que derivó en una convivencia entre las fuerzas formales –Policía, Fuerzas Armadas– y grupos informales que reivindican legitimidad por su relación con órganos del Estado. Este sistema –descrito por algunos analistas como un orden de seguridad híbrido⁷–, ha significado que en algunas zonas del país las milicias operan de manera relativamente efectiva como fuerzas de seguridad, pero en otros casos los grupos armados se han movilizadopor sus propias agendas ideológicas y por sus intereses políticos, económicos y criminales. En este sentido, cabe destacar que muchos conflictos locales en distintos puntos del país han estado muchas veces motivados por la competencia por el control de recursos o rutas de tráfico de todo tipo (bienes, personas, armas, drogas), aprovechando las debilidades del Estado central y las características geográficas de Libia, con un amplio territorio y centros de población concentrados en la zona costera del país.⁸ Así, durante 2014 las milicias de diverso signo protagonizaron múltiples disputas –incluyendo por el control de pozos petroleros y puertos– y no dudaron en recurrir a la vía armada para presionar a las autoridades y forzar la adopción de determinadas políticas.

En el plano del poder político e institucional, el principal desafío que enfrenta Libia radica en la existencia de dos instancias paralelas que reivindican su legitimidad como máxima autoridad del país. Aunque reconocido internacionalmente, el Parlamento y el Ejecutivo instalado en Tobruk presentan una serie de debilidades.⁹ Este legislativo es fruto de unas elecciones que contaron con una baja participación, equivalente a tan solo un cuarto del electorado –1,5 millones de personas se inscribieron para votar en estos comicios (frente a 2,8 millones en 2012),

de las cuales sólo votó la mitad– en parte como consecuencia del clima de inseguridad y de la decepción con la evolución política en el país. La inseguridad impidió que se votara en algunas localidades, lo que derivó en que no se pudieran elegir los 200 escaños de la Cámara de Representantes y de los 188 escogidos, 30 han boicoteado las sesiones desde que el Parlamento decidió trasladarse a Tobruk. El Legislativo y el Gobierno que operan en Trípoli, en tanto, han persistido en la defensa de su propia legitimidad y se han apoyado en una decisión de la Corte Suprema libia que en noviembre declaró inconstitucional al Parlamento de Tobruk por problemas en la convocatoria a las elecciones, una decisión que ha sido desestimada por el Gobierno de al-Thinni. Este clima de fragmentación y polarización ha conducido a un bloqueo que algunos analistas han descrito como un “balance de debilidades” entre los diversos actores políticos y armados, en el que ninguno de ellos tiene capacidad de imponerse sobre al resto.

A este escenario se suma la proyección en Libia de las tensiones regionales, a través de la intervención foránea en apoyo de diversos actores en disputa en el país. Esta internacionalización del conflicto se tradujo en la participación de Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en ataques contra las fuerzas islamistas libias. Ambos países fueron acusados de estar involucrados en ataques aéreos contra posiciones del grupo islamista Ansar al-Sharia en Bengasi y de la Operación Amanecer en Trípoli. Paralelamente, Qatar, Turquía y Sudán fueron señalados por su presunto respaldo a facciones islamistas en Libia. Esta implicación de actores regionales en la crisis libia no es nueva, sin embargo, ya que durante la revuelta contra

Gaddafi también se registró un apoyo militar y logístico por parte de algunos países a grupos armados afines. En este contexto, cabe destacar que en línea con una tendencia a nivel regional, tanto el general Hifter como las autoridades con base en Tobruk han intentado enmarcar su disputa con los grupos armados de Bengasi y Trípoli en la lógica de “guerra contra el terrorismo” contra sectores yihadistas, a pesar de que las complejidades de la disputa en Libia trascienden el eje islamista-secular. Este discurso sintoniza especialmente con la política adoptada en Egipto por el general y actual presidente Abdul Fattah al-Sisi, tras el derrocamiento del Gobierno de los Hermanos Musulmanes (HM).¹⁰ A El Cairo le preocupa en particular el control de los flujos fronterizos en la frontera entre Libia y Egipto, dado que la zona se ha convertido en una puerta de entrada de armas y combatientes con

En el plano del poder político, el principal desafío que enfrenta Libia radica en la existencia de dos instancias paralelas que reivindican su legitimidad como máxima autoridad del país

6. Alan West, “How we are failing in Libya”, *al-Jazeera*, 23 de octubre de 2014, <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/how-are-failing-libya-2014102373724312689.html>.
7. Frederic Wehrey, *Ending Libya’s Civil War: Reconciling Politics, Rebuilding Security*, Carnegie Endowment for International Peace, 24 de septiembre de 2014, http://carnegieendowment.org/files/Brief-Wehrey_Libya.pdf.
8. Mark Shaw y Fionna Mangan, *Illicit Trafficking and Libya’s Transition: Profits and Losses*, United States Institute of Peace (USIP), <http://www.usip.org/publications/illicit-trafficking-and-libya-s-transition-profits-and-losses>.
9. Frederic Wehrey y Wolfram Lacher, “Libya’s Legitimacy Crisis”, *Foreign Affairs*, 6 de octubre de 2014, <http://www.foreignaffairs.com/articles/142138/frederic-wehrey-and-wolfram-lacher/libyas-legitimacy-crisis>.
10. Frederic Wehrey, “Is Libya a Proxy War?”, *Washington Post*, 24 de octubre de 2014, <http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/10/24/is-libya-a-proxy-war>.

destino al Sinaí y también Siria. Según un informe de la ONU divulgado a principios de 2014, Libia constituía una fuente clave de arsenales ilícitos transferidos a al menos 14 países de diversos continentes, entre ellos Chad, Malí, Túnez y Líbano. A finales de 2014, las informaciones sobre el entrenamiento en Libia de yihadistas destinados a combatir en las filas de Estado Islámico (ISIS) en Siria e Iraq aumentó la preocupación internacional sobre la situación en el país.

Pese a esta inquietud retórica, en términos generales el caso de Libia se vio eclipsado durante 2014 por otros temas de la agenda global –como el propio ISIS o la crisis en Ucrania–, y la comunidad internacional no demostró un compromiso activo en la solución del conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en agosto la resolución 2174 en la que condenó el uso de la violencia contra civiles y mostró su disposición también a aprobar sanciones contra quienes amenacen la paz y la estabilidad del país. Los esfuerzos puestos en marcha durante 2014 para promover iniciativas de diálogo y paz no prosperaron. Las diversas iniciativas impulsadas en su momento por la UNSMIL no consiguieron establecer una tregua entre las facciones armadas. Tras ser designado como enviado especial para Libia, el diplomático español Bernardino León impulsó contactos entre las partes que derivaron en una primera reunión entre grupos políticos rivales en la localidad de Gadhames (oeste del país). Si bien las conversaciones tuvieron como resultado un compromiso para sortear las diferencias pacíficamente, esta aproximación no derivó en la aplicación de un cese el fuego, dada la limitada ascendencia de las fuerzas políticas sobre los diversos grupos armados, no dispuestos a una tregua.

A finales de año estaba prevista una nueva reunión en Ghadames, con el objetivo de llegar a un acuerdo para gestionar lo que queda del período de transición hasta la adopción de una nueva Constitución y alcanzar un consenso para frenar la violencia. Entre las alternativas se barajaba que la asamblea encargada del borrador constitucional asumiera el liderazgo del período de transición o que se conformara un gobierno de unidad nacional

basado en el actual reparto de fuerzas del país.¹¹ Sin embargo, las condiciones impuestas por las partes para participar en el diálogo –que obligaron a varias postergaciones– evidenciaban las dificultades para superar el escenario de polarización en Libia. Las autoridades de Tobruk han exigido conocer la lista de participantes e insistieron en que los grupos armados “terroristas” debían ser desmantelados y que no debían formar parte de las negociaciones; mientras, desde Trípoli se planteó la necesidad de reconocer la sentencia de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del Parlamento de Tobruk. El enviado especial de la ONU, en tanto, parecía haber tomado distancia de la posición inicial de la ONU en cuanto a su reconocimiento a las autoridades de Tobruk. Bernardino León ha dejado claro que en el actual escenario ni los representantes en Tobruk ni los de Trípoli están en condiciones de reclamar legitimidad¹² y ha insistido en la urgencia de avanzar en el diálogo antes de que el país descienda a una situación de caos total.

Desencallar el actual escenario en Libia es, por tanto, un desafío de extrema complejidad. Entre otros temas, los retos incluyen asegurar el cese de la violencia a través de acuerdos de alto el fuego, la configuración de un esquema de poder inclusivo, un proceso de reconfiguración del sistema de seguridad que apunte al desarme de combatientes, al control de armas y al sometimiento al poder civil, además de un compromiso de no interferencia de actores regionales en el conflicto –varios países (incluyendo EAU, Egipto, Turquía y Qatar) suscribieron un compromiso en este sentido en septiembre, pero está por verse su implementación efectiva. Junto a ello, se debe atender a las necesidades de la población libia, severamente afectada por las recientes dinámicas de violencia, por las consecuencias de la guerra contra Gaddafi, y por el legado del gobierno autoritario y represivo de Gaddafi. Desde un principio se sabía que los desafíos para la reconstrucción de Libia tras décadas de autoritarismo serían complejos, ya que supondrían erigir un Estado a partir de un contexto con graves carencias institucionales. La evolución del conflicto en 2014 ha confirmado que el reto está siendo más difícil de lo esperado.

11. Mustafá Fetouri, “UN envoy balances rival factions in risky Libyan talks”, *Al-Monitor*, 8 de diciembre de 2014, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/libya-tripoli-parliament-recognize-united-nations-envoy.html>.

12. *Ibid.*

6.3. La escalada de la violencia en la región china de Xinjiang

En 2014, la región oriental china de Xinjiang (también denominada Turquestán Oriental) alcanzó unos niveles de violencia sin precedentes. A pesar de que las restricciones de acceso impuestas por el Gobierno chino dificultan confirmar la veracidad de las cifras y la información, se estima que durante el 2014 alrededor de 330 personas fallecieron y varios cientos de personas resultaron heridas. Estos datos confirman la tendencia al alza que se ha vivido en la región en los últimos años: en 2013, el Gobierno reconoció la muerte de unas 110 personas, aunque fuentes periodísticas y académicas elevan dicha cifra a alrededor de 130, y organizaciones uigures en el exilio a muchas más. En 2012, Beijing admitió que se habían registrado alrededor de 200 episodios de violencia y de terrorismo. Anteriormente, la región había logrado una cierta atención mediática por los atentados que se produjeron en 2008 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing y por el estallido de violencia en la ciudad de Urumqi en 2009, que provocó la muerte de alrededor de 200 personas. Además del incremento en la frecuencia e intensidad de los hechos de violencia, varios analistas consideran que la mayor sofisticación y visibilidad mediática de éstos denota un mayor grado de organización y capacidad bélica y logística de las organizaciones insurgentes.

Ante esta situación, Beijing ha reconocido reiteradamente que la insurgencia uigur es la amenaza a la seguridad nacional más real e inmediata que enfrenta el país y ha redoblado sus esfuerzos en materia de contrainsurgencia, incrementando notablemente su presencia policial y militar en la provincia, doblando el presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo, intensificando las maniobras militares y ejercicios antiterroristas en Xinjiang e iniciando a finales de mayo una campaña de un año de duración con el objetivo de reducir los niveles de violencia y debilitar a las organizaciones insurgentes en Xinjiang. Según varios medios de comunicación, a los seis meses de iniciarse dicha campaña se habían desarticulado 115 células terroristas (el 40% de ellas gracias a la información obtenida durante los interrogatorios a personas detenidas), se habían cerrado 117 centros de educación religiosa (y detenido a 238 personas responsables de los mismos), se habían dictado y ejecutado sentencias de muerte contras decenas de personas por su participación en distintos episodios de violencia y se habían incautado unos 18.000 documentos que se consideraba alentaban el terrorismo y el extremismo religioso.

Varios medios de comunicación se han referido a Xinjiang como la “Chechenia de China” y han identificado este

conflicto como uno de los que puede generar mayor inestabilidad en Asia.¹³ Sin embargo, de cara al futuro inmediato la situación de violencia podría incluso agudizarse por tres factores distintos. En primer lugar, por la intención declarada de Beijing de intensificar su lucha contra las organizaciones insurgentes uigures, lo cual puede tener un grave impacto en la situación de derechos humanos de la región y a su vez incrementar la legitimidad y la membresía de las organizaciones armadas. En segundo lugar, por la posibilidad de que los grupos armados que operan en Xinjiang efectivamente tengan o puedan desarrollar vínculos con organizaciones transnacionales que les confiera una mayor capacidad organizativa, logística y económica para llevar a cabo ataques de gran envergadura. En tercer lugar, por el nuevo escenario geoestratégico que se abre en la región con la retirada de tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, y que está provocando, entre otras cuestiones, una mayor presión de China a sus países vecinos (en especial a Afganistán y a Pakistán) para que combatan y expulsen de su territorio a organizaciones armadas uigures.

En cuanto al primer punto, existen varios motivos para pensar que Beijing intensificará la represión y militarización en Xinjiang. En primer lugar, porque a ojos de Beijing esta estrategia ha sido relativamente exitosa en otras ocasiones y contextos para frenar e invisibilizar el descontento social, y a la vez disuadir la emergencia de brotes de violencia, como en Tíbet o Mongolia Interior, o bien en la propia región de Xinjiang en los años noventa.¹⁴ En segundo lugar, porque hasta el momento la comunidad internacional no solamente no ha ejercido presión política para que Beijing ponga fin a las numerosas violaciones masivas de los derechos humanos denunciadas por organizaciones de derechos humanos o grupos uigures en el exilio, sino que en algunos casos, como los países fronterizos con China, incluso ha apoyado decididamente la estrategia de Beijing y ha colaborado en su ejecución. En tercer lugar, por la importancia estratégica de Xinjiang para China, tanto en el plano económico como en el plano de la seguridad nacional. En cuanto a la dimensión económica, Xinjiang es clave para la suficiencia energética de China y, por tanto, para su desarrollo económico en las siguientes décadas. Actualmente Xinjiang es la tercera provincia productora de petróleo en China, y se estima que solamente se han descubierto una pequeña parte de las reservas que alberga. Xinjiang también es la principal generadora de gas (aproximadamente un tercio de la producción nacional) y una de las principales fuentes de carbón y energía eólica. También en clave de abasteci-

13. The Economist, “A Chechnya in the making”, *The Economist*, 9 de agosto de 2014, <http://www.economist.com/news/leaders/21611067-iron-fist-xinjiang-fuelling-insurrection-chinas-leadership-must-switch-tactics>; *Hurriyet Daily News*, “China’s Chechnya: Terrorism in Xinjiang”, *Hurriyet Daily News*, 16 de agosto de 2014, <http://www.hurriyetdailynews.com/chinas-chechnya-terrorism-in-xinjiang.aspx?PageID=238&NID=70494&NewsCatID=418>; Mostafa Elmadboly, “China’s Chechnya? Why There is More to Xinjiang Than Terrorism”, *Fordham Political Review*, 2014, <http://fordhampoliticalreview.org/chinas-chechnya-why-there-is-more-to-xinjiang-than-terrorism/>.

14. Kilic Kanat, “Repression in China and Its Consequences in Xinjiang”, *Hudson Institute*, 28 de julio de 2014, <http://www.hudson.org/research/10480-repression-in-china-and-its-consequences-in-xinjiang>.

miento energético, Xinjiang es una región fundamental para China, puesto que por allí pasan los principales oleoductos y gaseoductos que importan hidrocarburos desde Asia Central y Oriente Medio, las dos principales fuentes de energía de China. Cabe señalar que actualmente China es el segundo importador de petróleo a escala mundial y es uno de los países del mundo con mayor dependencia del petróleo. La alternativa a los oleoductos y gaseoductos que atraviesan Xinjiang sería el transporte de energía por mar, lo cual incrementa el tiempo, el coste y el riesgo de incidentes, puesto que deben navegarse regiones geoestratégicamente sensibles como el Océano Índico o el estrecho de Malaca, uno de los principales puntos de la piratería internacional. En términos de seguridad nacional, el hecho de que Xinjiang tenga frontera con varios países de Asia Central también es geoestratégicamente relevante, tanto por la influencia que China quiere ejercer en Asia Central en las siguientes décadas como por las influencias y dinámicas que puedan trasladarse a China desde algunos de los países fronterizos que, como Pakistán y Afganistán, en las últimas décadas han padecido conflictos armados con un enorme potencial para desestabilizar la región. Algunos análisis consideran que Xinjiang puede erigirse en una barrera a la entrada en China de organizaciones o ideologías potencialmente desestabilizadoras, pero también en una puerta de entrada a las mismas.

Otro factor que puede agudizar la situación de violencia en Xinjiang es la posibilidad, advertida tanto por el Gobierno chino como por varios analistas, de que las organizaciones armadas uigures incrementen su capacidad bélica fruto de sus contactos con organizaciones foráneas consideradas terroristas por Beijing o incluso de la infiltración de combatientes extranjeros en territorio chino. En este sentido, algunas voces advierten que el *modus operandi* de los grupos armados podría estar cambiando, como así lo demostraría la capacidad para llevar a cabo ataques significativos fuera de Xinjiang (en la plaza de Tiananmen a finales de 2013 o a mediados de 2014 en la estación de tren de Kunming, en un atentado que fue calificado por varios medios de comunicación como el “11 de septiembre en China”), la utilización de coches bomba, el ataque indiscriminado contra población civil o la utilización de atentados suicidas. Sin embargo, cabe señalar que tanto las armas utilizadas en la mayor parte de los episodios de violencia, normalmente cuchillos o artefactos explosivos manufacturados, así como el carácter aparentemente desorganizado o el alto número de víctimas entre los combatientes que llevan a cabo acciones armadas, parecen denotar todavía un grado muy precario de organización y profesionalización de los grupos insurgentes.

Tradicionalmente, el Gobierno de Beijing ha acusado a los grupos armados uigures, y en especial al Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés) de mantener vínculos con varias organizaciones

Varios medios de comunicación se han referido a Xinjiang como la “Chechenia de China” y han identificado este conflicto como uno de los que puede generar mayor inestabilidad en Asia

que considera terroristas, como el IMU (un movimiento formado a principios de los años noventa que inicialmente operaba en Uzbekistán pero que con el paso del tiempo ha extendido su radio de acción a otras zonas de Asia Central y de Pakistán y Afganistán), Al-Qaeda o milicias talibanes en Afganistán y Pakistán. El Gobierno chino sustenta tales acusaciones en informes de inteligencia propios que indicarían que militantes uigures reciben entrenamiento militar de manera continua y estable en países como Pakistán y Afganistán, en la prolongada detención de 22 uigures en la prisión de Guantánamo, en la muerte de varios uigures durante los ataques aéreos que las Fuerzas Armadas pakistaníes llevaron a cabo en las áreas tribales de Pakistán en la primera mitad de 2014 o en la inclusión por parte de Naciones Unidas del ETIM en su lista de organizaciones terroristas desde el año 2002. Además de la presencia de combatientes uigures en otros países, Beijing también ha denunciado recientemente la infiltración de combatientes extranjeros en Xinjiang, especialmente de grupos procedentes de Siria. A pesar de que la cúpula de ETIM ha negado tales acusaciones en algunas ocasiones e incluso ha manifestado una cierta distancia ideológica y organizativa con al-Qaeda, el

Gobierno chino ha insistido en el nexo entre el secesionismo uigur y el extremismo islámico transnacional y ha vinculado su lucha contrainsurgente contra organizaciones secesionistas uigures con la llamada guerra global contra el terrorismo, obteniendo así un cierto apoyo internacional a sus políticas y un cierto silencio acerca de las consecuencias de dichas políticas sobre la comunidad uigur en Xinjiang.

En este sentido, cabe destacar que el apoyo que algunas repúblicas centroasiáticas han prestado a Beijing en su lucha contra el secesionismo uigur, tanto en las relaciones bilaterales como a través de la Organización de Cooperación de Shanghai, es especialmente importante para el Gobierno chino. No solamente porque facilita cuestiones como los tratados de extradición, sino porque Beijing neutraliza de esta manera el eventual apoyo que pudiera tener la causa uigur en determinados países por la afinidad cultural, lingüística e histórica entre varios de los pueblos túrquicos de la región. Cabe recordar que la comunidad uigur históricamente ha tenido vínculos culturales con otros pueblos de habla túrquica y su identidad ha tenido un cierto componente transnacional. Desde la perspectiva de Beijing, este hecho hace a la comunidad uigur especialmente receptiva a un determinado pan-turquismo promovido entre algunas repúblicas centroasiáticas, y especialmente reacia a las políticas asimilacionistas impulsadas desde el Gobierno chino en las últimas décadas. En cualquier caso, a pesar de la dimensión transnacional de la identidad uigur, de los posibles vínculos entre el ETIM y organizaciones foráneas y de su presunta cercanía al islamismo radical, varios analistas han señalado que el Gobierno chino ha tendido a exagerar la amenaza del secesionismo uigur. Como mínimo hasta el momento, ETIM jamás ha tenido la capacidad de erigirse en una

amenaza sería para el Gobierno chino ni de mantener una lucha insurgente de envergadura por su falta de apoyo a escala internacional y por los escasos recursos humanos y materiales a su disposición.

El último factor que podría motivar un incremento de la tensión en Xinjiang es el supuesto vacío de seguridad en la región que podría provocar el proceso de retirada de tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. Este hecho podría tener un doble efecto sobre el conflicto. En primer lugar, algunas organizaciones podrían aprovechar el nuevo escenario que se abre en Afganistán para incrementar su presencia en Xinjiang, del mismo modo que algunas organizaciones uigures podrían establecerse de manera temporal o estable más fácilmente en Afganistán. La retirada parcial de la región de una potencia como EEUU está motivando una cierta recomposición de la zona en términos geoestratégicos, como así lo demuestran las conversaciones que se han producido a lo largo del 2014 entre China, Rusia, India y Pakistán para abordar los escenarios y riesgos de futuro en cuestiones de seguridad. El segundo efecto que el nuevo escenario geoestratégico podría tener en el conflicto en Xinjiang es un incremento de los enfrentamientos entre los Gobiernos de Pakistán y Afganistán con organizaciones uigures que supuestamente permanecen en ambos países, frutos de los acuerdos bilaterales que está estableciendo China con los dos Gobiernos para que incrementen la presión militar contra ETIM.

En este sentido, a finales de octubre los Gobiernos de Afganistán y China suscribieron un acuerdo por el que Kabul se comprometía a combatir y expulsar de su territorio a ETIM y a cualquier otra organización armada uigur a cambio del apoyo económico por parte de China (sobretudo en la construcción de infraestructuras y en la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado). En este sentido, el nuevo presidente afgano, Ashraf Ghani, reafirmó públicamente el compromiso de cooperar estrechamente con China en materia de seguridad que ya había expresado el Gobierno de Hamid Karzai a principios de 2014. Además de la aproximación de China al Gobierno afgano a través de cooperación económica bilateral y del apoyo que le prestó en su momento para que consiguiera el estatus de observador en la Organización de Cooperación de Shanghai, Beijing también se habría acercado discretamente a las milicias talibán para que éstas no extendieran sus acciones armadas a Xinjiang o incrementaran su cooperación con el ETIM u otras organizaciones armadas uigures. A cambio, China proporcionaría un cierto reconocimiento político a la insurgencia talibán e incluso habría llevado a cabo algunas negociaciones sobre la extracción de recur-

sos en las áreas norteñas del país y fronterizas con Pakistán. El interés de China en mantener buenas relaciones con Afganistán y en jugar un mayor rol en la región tras el inicio de la retirada de tropas de EEUU y de la OTAN no solamente se reduce a cuestiones de seguridad interna, sino también a su interés en participar activamente en la explotación de los cuantiosos recursos naturales que Afganistán alberga (especialmente gas y petróleo) y en su importación a China.¹⁵

Por otra parte, Pakistán y China han sido aliados estratégicos desde hace décadas, de modo que ya en los últimos años el Gobierno pakistaní se había comprometido a luchar activamente contra ETIM y a colaborar estrechamente con Beijing en materia de seguridad.

En 2013, por ejemplo, ya declaró ilegales y prohibió su presencia en su territorio a ETIM, IMU y Unión de la Yihad Islámica. Sin embargo, en 2014 incrementó su compromiso con el Gobierno chino. En junio, por ejemplo, varios combatientes uigures murieron durante una ofensiva de las Fuerzas Armadas pakistaníes en Waziristán Norte en la que fallecieron aproximadamente 1.100 personas. Además, durante el 2014 se incrementó la cooperación bilateral en varios sentidos (en noviembre, por ejemplo, alcanzaron 20 acuerdos de distinto tipo),

mientras que tanto el primer ministro como el presidente pakistaníes se comprometieron públicamente a redoblar sus esfuerzos para reducir la presencia y actividad de organizaciones uigures en su territorio.¹⁶

A pesar de que el secesionismo uigur ha sido activo en Xinjiang en las últimas décadas, hasta hace relativamente poco no había logrado captar la atención de medios de comunicación ni de la comunidad internacional. Bajo el amparo de la guerra global contra el terrorismo, Beijing había sido capaz de justificar sus políticas contrainsurgentes en Xinjiang, silenciar las violaciones de derechos humanos denunciadas por organizaciones uigures y garantizarse el apoyo de las grandes potencias y de sus países vecinos en su lucha antiterrorista. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente en 2014, tanto el incremento como la mayor visibilidad de las acciones armadas del secesionismo uigur han provocado un incremento de la represión y de la militarización en Xinjiang. De cara al futuro inmediato, la intensificación de las políticas contrainsurgentes por parte de Beijing, el incremento de la capacidad bélica de las organizaciones armadas uigures y una cierta mutación en su *modus operandi*, así como el nuevo escenario geoestratégico que se abre en la región con la retirada de tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán, podrían provocar aún mayores niveles de violencia e inestabilidad en Xinjiang.

Se estima que en 2014 alrededor de 330 personas fallecieron y varios cientos de personas resultaron heridas en Xinjiang, en un incremento sin precedentes de la violencia

15. OpenCanada, "NATO, China, and Afghanistan at the Security-Development Nexus", *OpenCanada*, 4 de febrero de 2014, <http://opencanada.org/features/the-think-tank/comments/nato-china-and-afghanistan-at-the-security-development-nexus/>.

16. South Asia Monitor, "Xinjiang an important determinant in Sino-Pakistan relations", *South Asia Monitor*, 2 de diciembre de 2014, <http://southasiamonitor.org/detail.php?type=sl&nid=9772>.

6.4. Violencia urbana en Pakistán: Peshawar, Quetta y Karachi, escenarios de conflictos y tensiones

Pakistán es escenario de varios conflictos armados y situaciones de tensión. Estos contextos de violencia han tenido un grave impacto sobre la población tanto en términos de mortalidad directamente vinculada a la violencia armada, como sobre las condiciones generales de seguridad en las que vive la población pakistaní y sobre la economía y el desarrollo del país. Aunque la violencia en Pakistán tiene lugar de manera repartida por diferentes zonas del territorio, con un grave impacto en la zonas tribales tanto de las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), como de las provincias de Khyber Pakhtunkhwa o de Baluchistán, varias grandes ciudades del país –en particular las capitales de provincia Peshawar, Quetta y Karachi– están siendo gravemente afectadas por la violencia. El impacto de la violencia en los grandes núcleos urbanos es objeto de preocupación a nivel internacional, aunque no necesariamente está vinculado a las dinámicas de los conflictos armados o de la violencia política, como sí sucede en el caso de Pakistán, en el que los conflictos tienen un impacto directo en las ciudades. Esta preocupación ha llevado al desarrollo de conceptos como el de “ciudades frágiles”, poniendo de manifiesto los graves retos que afrontan las grandes urbes contemporáneas en términos de seguridad y desarrollo y para la garantía del bienestar de las personas que las habitan.¹⁷

Las cuatro capitales de provincia pakistaníes, Peshawar, Quetta, Karachi y Lahore –sobre todo las tres primeras– constituyen bases operativas y financieras para grupos armados y redes criminales (a menudo vinculadas a los grupos armados), que operan en las propias ciudades o en otras zonas del país.¹⁸ Aunque cada ciudad tiene sus peculiaridades y es escenario preeminente de algún determinado tipo de violencia, lo cierto es que todas ellas comparten en mayor o menor grado algunas características comunes: son base para las organizaciones insurgentes talibanes o de otro tipo –como los grupos nacionalistas baluchis– que actualmente se enfrentan a las fuerzas de seguridad gubernamentales; son escenario de violencia de carácter sectario, fundamentalmente entre las comunidades suníes y shíes; y están fuertemente militarizadas con una enorme presencia de diferentes cuerpos de seguridad y efectivos militares en el espacio público y un grave impacto también en el espacio privado.

En el caso de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, su ubicación geográfica en la ruta hacia Afganistán y el hecho de estar bordeada casi totalmente por las FATA hace que sea un lugar estratégico para

la insurgencia que opera a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán, donde muchos grupos han ubicado sus cuarteles generales. Durante el régimen del general Perez Musharraf se permitió a numerosos grupos talibanes o vinculados a al-Qaeda establecer sus bases en la provincia al tiempo que se favoreció la creación de una coalición política islamista (MMA) para ejercer de contrapeso a los partidos tradicionales (ANP y PPP), lo que favoreció la propagación de un programa político islamista de carácter radical, creándose un clima propicio para el extremismo, caldo de cultivo de la insurgencia talibán.¹⁹ La creciente presencia talibán en Peshawar ha quedado evidenciada con varios atentados de enorme impacto, el más grave de ellos el 16 de diciembre de este año, en el que 141 personas (de las que 132 eran niños y niñas) murieron como consecuencia de un ataque armado contra un centro escolar. Otro atentado de enorme importancia fue el que causó la muerte a 80 personas al estallar una bomba en una iglesia en septiembre de 2013. Durante los 11 primeros meses del año 2014, según las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal, al menos 191 personas murieron y 361 resultaron heridas como consecuencia de incidentes relacionados con el terrorismo. Por otra parte, muchas de las organizaciones criminales que operan en la provincia tienen vínculos con los grupos insurgentes, lo que ha contribuido al enquistamiento de la violencia. En paralelo a la violencia talibán, también se producido una consolidación de la violencia de carácter sectario en la ciudad, en la que la organización extremista sunní Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) está fuertemente implantada. Los estrechos vínculos entre LeJ y la insurgencia del Tehrik-i-Taliban (TTP), evidenciados por la doble militancia de algunos de sus integrantes y líderes, hacen todavía más complejo el mapa de actores responsables de la violencia en la capital de Khyber Pakhtunkhwa, y demuestran la capacidad de penetración en la ciudad de estos grupos. Decenas de personas de confesión shíi han muerto como consecuencia de la violencia sectaria por parte de los grupos radicales suníes en Peshawar, que también han perseguido a suníes moderados.

La violencia en Quetta tiene algunas similitudes con la de Peshawar, así como algunas características y dinámicas propias. Quetta es uno de los escenarios de varios conflictos armados que transcurren simultáneamente: los que enfrentan a las insurgencias talibán pakistaníes y afganas con los Gobiernos pakistaní y afgano, y el que tiene lugar entre la insurgencia nacionalista baluchi y el Gobierno de Pakistán. En lo que respecta a la presencia de la insurgencia talibán, cabe señalar que la capital de Baluchistán ha sido un centro logístico de enorme importancia para

17. Muggah, Robert. “Deconstructing the fragile city: exploring insecurity, violence and resilience”. *Environment and Urbanization*, Vol. 26(2): 345-358, 2014.

18. International Crisis Group. *Policing Urban Violence in Pakistan*. International Crisis Group, Asia Report N° 255, 2014.

19. *Ibid.*

dos de las partes implicadas en el conflicto armado en Afganistán, las fuerzas internacionales y la insurgencia talibán,²⁰ y es la sede de la shura de Quetta, cúpula talibán encabezada por el Mullah Omar. Con respecto al conflicto armado con la insurgencia nacionalista baluchi, la ciudad de Quetta ha sido escenario de diferentes atentados por parte de la insurgencia contra lo que se considera la sede del poder colonial pakistaní sobre la población baluchi. La fuerte militarización y las múltiples violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado han impulsado también a muchos jóvenes estudiantes de la capital a apoyar a las organizaciones insurgentes e incluso unirse a sus filas. Por otra parte, en la ciudad de Quetta se han producido numerosos actos de violencia sectaria por parte de LeJ contra personas de la comunidad étnica hazara, mayoritariamente de confesión shií, causando decenas de víctimas mortales.

Karachi es tal vez la ciudad pakistaní en la que más evidentes resultan los problemas de violencia. Se trata de una megaciudad –denominación habitual para las urbes con más de 10 millones de habitantes– con más de 21 millones de habitantes señalada como posiblemente la más violenta del mundo, con una tasa de homicidios del 12,3 por cada 100.000 residentes. A esto se unen gravísimos problemas demográficos como muestra el hecho de que entre 2000 y 2010 aumentara su población en más de un ochenta por ciento.²¹ Este aumento demográfico se debe en parte al desplazamiento de población procedente de zonas afectadas por conflictos y violencia. Karachi es escenario de un conflicto etnopolítico que enfrenta a los seguidores de las tres principales formaciones políticas de la ciudad: el MQM –principal partido político de Karachi, representante de la comunidad muhajir–, el PPP –principal partido del país y segundo en la ciudad de Karachi– y el ANP –tercer partido de la ciudad, y representante de la cada vez más numerosa comunidad pashtun. Cada una de las formaciones políticas cuenta con sus propias organizaciones armadas, que se enfrentan fundamentalmente por el control del poder político de la ciudad. Los cambios demográficos experimentados en Karachi como consecuencia de la masiva llegada de población pashtun desplazada desde la zona noroeste del país, han agravado las rivalidades políticas. Además, la incapacidad del Gobierno para garantizar la provisión de los servicios básicos en la ciudad, unida a la pobreza y el desempleo han fortalecido a las mafias criminales que compiten por los recursos de la ciudad.²² Aunque durante el año 2014 se registró un descenso en

el número de muertes violentas con respecto a años anteriores –aproximadamente 1.600 durante los primeros nueve meses del año, frente a las casi 3.400 del año 2013 en su totalidad o 3.100 del año 2012– la situación continuó siendo de extrema gravedad. Las menores tasas de asesinato se deberían a la operación de seguridad iniciada en septiembre de 2013, que no obstante, se mostró claramente insuficiente ya que el uso de la violencia a gran escala ha persistido. Uno de los ejemplos más graves del impacto de la violencia en la ciudad es el caso de la zona de Lyari, un feudo tradicional del PPP con fuerte presencia de las organizaciones armadas y en el que se ha llegado a hacer uso de armamento pesado en los enfrentamientos entre los diferentes grupos.²³ En paralelo a esta violencia, la insurgencia talibán también ha penetrado en la ciudad tratando de consolidar su presencia aprovechando la fragilidad de este entorno urbano.

La situación de las tres ciudades pakistaníes analizadas muestra la importancia de prestar atención a los entornos urbanos como escenarios de conflictos y de violencia a gran escala. Si bien tradicionalmente las ciudades han sido consideradas como espacios relativamente seguros en los que la población buscaba refugio en caso de conflicto armado, también es cierto que los movimientos de población hacia las ciudades y los cambios a gran escala, no solo demográficos, sino también de carácter político y económico, pueden derivar en escenarios de confrontación de alta intensidad en las ciudades,²⁴ con complejos entramados entre las elites políticas y económicas y los actores armados y criminales y gravísimos impactos para la población que las habita. En el caso de Pakistán, hay un riesgo evidente de que

las diferentes insurgencias consoliden cada vez más su presencia en los entornos urbanos, particularmente en las capitales de provincia, y de una mayor militarización de las ciudades, con graves consecuencias para el futuro del país. Las ciudades pakistaníes corren el riesgo de convertirse en el escenario de atentados cada vez más graves y mortales con graves consecuencias para la vida cotidiana de la población. Así pues, es necesario que las autoridades concentren importantes esfuerzos en tratar de evitar el enquistamiento de la violencia en las ciudades y que por el contrario se adopten medidas encaminadas a abordar las causas profundas y las diferentes dinámicas de estos conflictos, puesto que las ciudades ofrecen también importantes oportunidades para la transformación de la violencia y la creación de entornos seguros para la población.

Peshawar, Quetta y Karachi son base para las organizaciones insurgentes enfrentadas a las fuerzas de seguridad, son escenario de violencia de carácter sectario y están fuertemente militarizadas

20. Gazdar, H., S.Ahmad Kakar, I. Khan. *Buffer Zone, Colonial Enclave or Urban Hub Quetta: Between Four Regions and Two Wars*. CSRC Working Papers, Crisis States Research Centre (CSRC), 2010.

21. Taimur Khan, "Cooking in Karachi". *Foreign Policy*, 3 de septiembre de 2013.

22. International Crisis Group, op. cit.

23. *Ibid.*

24. Beall, Jo, Tom Goodfellow y Dennis Rodgers. *Cities and Conflict. Policy Directions*. Crisis States Research Centre, Junio de 2010.

6.5. La guerra en Ucrania: escasas perspectivas de salida

Ucrania, país de más 44 millones de personas, de gran importancia geoestratégica y considerado una democracia en transición desde su independencia de la URSS en 1991, afronta una grave crisis sociopolítica, un conflicto armado en el este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Tras la vertiginosa sucesión de acontecimientos entre finales de 2013 y comienzos de 2014 (protestas masivas pro-europeas, conocidas como “Maidán”; caída del régimen del presidente Víktor Yanukóvich; anexión de Crimea por parte de Rusia; protestas anti-Maidán y pro-rusas en el este y deriva militarista en esa zona hasta resultar en conflicto armado), la inestabilidad en el este de Ucrania escaló también rápidamente, desembocando en una guerra con miles de víctimas y centenares de miles de personas desplazadas internas (de varios centenares entre abril y junio se pasó a más de 3.000 a finales de septiembre). La disputa enfrenta a las milicias armadas pro-rusas –surgidas de los sectores que protagonizaron las protestas anti-Maidán–, apoyadas por Rusia y a las que se han unido combatientes internacionales, por una parte, y, por otra, a las fuerzas estatales ucranianas –con participación de grupos paramilitares– bajo el paraguas de las nuevas autoridades pro-europeas. A cuestiones como el estatus político y el grado de descentralización o la protección del idioma se añaden otras dimensiones de fondo, como la crisis internacional entre Occidente y Rusia. La evolución de la guerra en el este de Ucrania ofrece escasas o nulas perspectivas de mejora para 2015, con previsión de escenarios que podrían oscilar entre un futuro nuevo conflicto congelado en la zona OSCE; la continuación de un conflicto activo relativamente limitado; o la deriva a un conflicto de mayor alcance. Son muchos los factores que parecen reducir el margen para el arreglo pacífico: fortalecimiento militar de las partes y las posiciones beligerantes; las limitaciones del proceso de diálogo (falta de implementación de los acuerdos, entre otras); políticas de hechos consumados (ej. elecciones reconocidas por Rusia en las provincias en conflicto); y contexto internacional de antagonismo político, militar y económico de los actores ascendentes de las partes en conflicto (Occidente y Rusia, respectivamente), entre otros. Al mismo tiempo, los efectos negativos de la continuación de la guerra y, sobre todo, los nefastos riesgos de una escalada mayor con consecuencias inciertas para el continente, podrían actuar como elementos disuasorios y forzar a las partes, incluyendo los referentes internacionales (UE, Rusia), a reconducir el conflicto y, cuando menos, limitar su alcance. No obstante, las perspectivas son, a finales de 2014, preocupantes.

En los escenarios negativos o inciertos de futuro interviene diversos factores. Por una parte, la militarización de los actores en conflicto y su beligerancia. Rusia ha sido acusada reiteradamente de apoyo directo e indirecto a las milicias pro-rusas, especialmente proveyéndolas de armamento, tecnología militar y recursos humanos,

beneficiándose de una frontera porosa no controlada por Ucrania. Además de los “sospechosos habituales” para Rusia (OTAN, EEUU), también la OSCE, analistas y periodistas han apuntado o dado cuenta de ese apoyo múltiple. Formalmente Rusia niega categóricamente ese apoyo –como también negó en primera instancia que las tropas sin distintivo en Crimea fueran rusas, algo que después admitió–; sin embargo, todo apunta a una práctica de apoyo a las milicias, combinado con intentos de mantener la apariencia de autoridades locales genuinas. Así, por ejemplo, los ciudadanos de Rusia erigidos como líderes de las fuerzas rebeldes –tras reemplazar en un principio a líderes locales– fueron a su vez sustituidos de nuevo en agosto de 2014 por líderes locales. La OTAN, por su parte, anunció apoyos a Ucrania para mejorar sus capacidades de defensa en diversas áreas, incluyendo en cuestiones como la logística y la ciberdefensa, que se añade a la asistencia militar no letal de aliados como EEUU o Canadá. Al mismo tiempo, Ucrania ha apostado también por estrategias militaristas con grave impacto en términos de seguridad humana y que han alimentado la deriva violenta de la disputa (operación antiterrorista en primera instancia frente a otras posibles estrategias; bombardeos sobre núcleos de población, con impactos de desplazamiento forzado de población; entre otros elementos, y prácticas de castigo colectivo al poner fin a la financiación estatal en el Donbás –región que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk–, incluyendo hospitales y colegios, argumentando que la financiación acababa en manos rebeldes). Así, Ucrania ha combinado propuestas de paz y diálogo con prácticas militares agresivas y se ha afirmado dispuesta y preparada a una guerra amplia. Es decir, las partes en conflicto están más fortalecidas, con respaldos externos, y predispuestas al combate, aunque han mantenido activos los mecanismos de diálogo, con resultados irregulares.

En segundo lugar, las iniciativas de diálogo puestas en marcha hasta el momento, no han dado aún sus frutos y han mostrado limitaciones difíciles de superar sin la voluntad de las partes y en el contexto de fuerte antagonismo. Los mecanismos de paz y seguridad y de diálogo desplegados o alcanzados son diversos: misión de observación de la OSCE, desde marzo de 2014; pacto del 17 de abril (firmado en Ginebra) entre el Gobierno ucraniano interino, Rusia, la UE y EEUU; diálogo a través del Grupo Trilateral de Contacto (Ucrania, Rusia, OSCE) e interlocución de éste con las estructuras político-militares de los actores pro-rusos del este, resultando en diversos acuerdos (alto el fuego y plan de paz del 20 de junio; protocolo de Minsk del 5 de septiembre; y memorándum de Minsk del 19 de diciembre; altos el fuego de diciembre por separado en Donetsk y Lugansk); contactos diplomáticos bilaterales y multilaterales (con Alemania como principal gobierno occidental interlocutor con Rusia; reunión multilateral en Milán durante la cumbre de ASEM en octubre, entre otros ejemplos).

El alcance de los diversos acuerdos, en su mayoría amplios y sustantivos –recogiendo cuestiones tanto de seguridad como políticas, incluyendo descentralización y protección lingüística–, ha contrastado con la falta de implementación de los compromisos de alto el fuego en diversas zonas. La propia representante especial de la presidencia de turno de la OSCE en el Grupo Trilateral de Contacto Heidi Tagliavini, diplomática con amplia experiencia en la región, calificaba en los últimos meses de 2014 los acuerdos del 5 de septiembre como un gran logro, señalando que el alto el fuego estaba siendo respetado en amplias zonas del Donbás, aunque en algunas áreas consideraba “terrible” la situación, y se mostraba en términos generales confiada en el proceso. A inicios de diciembre se intuía la posibilidad de nuevas rondas que dieran resultados parcialmente positivos, si bien el reto residía en una mayor implementación y sostenimiento de los acuerdos, aspectos muy vinculados al papel de Rusia –como actor de poder sobre las milicias, en la práctica– y las relaciones internacionales, como elemento clave y mayoritariamente preocupante e incierto.

Y ello lleva en parte a un tercer bloque de argumentos sobre las perspectivas preocupantes en el conflicto, los relativos a la dimensión internacional del conflicto. La crisis en el este de Ucrania no es solo un conflicto armado interno, sino que sobre ella se han proyectado elementos internacionales de lo que constituye ya la peor crisis entre Occidente y Rusia desde el fin de la Guerra Fría, añadiendo obstáculos a su resolución. En esa crisis hay narrativas opuestas, principalmente la percepción euroatlántica de políticas agresivas de Rusia, en algunos casos contrarias al derecho internacional, y de abismo entre la retórica y los hechos (presiones de Rusia en 2013 sobre Ucrania para no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE, toma de control de Crimea y posterior anexión en 2014, apoyo a las milicias pro-rusas, acusaciones a Rusia de ser parte y árbitro en el conflicto, entre otros). Esa política de hechos consumados de Rusia ha alimentado la escalada militar y dificulta enormemente la contención y resolución del conflicto. A su vez, para Occidente, la posición está asociada a las supuestas ansias expansionistas rusas y sus intentos de imponer (o mantener) control sobre los estados ex soviéticos, entre otros aspectos, con capacidad de desestabilización de territorios soberanos. Asimismo, Occidente percibe su propio acercamiento a esa zona como el reflejo de los intereses soberanos de las poblaciones y gobiernos de dichos países de profundizar libremente sus relaciones con la UE y la OTAN como parte de sus procesos de democratización y de búsquedas de garantías de seguridad. Desde esa narrativa, Rusia no puede oponerse al camino elegido por esos países, tampoco en Ucrania. En paralelo, otros focos de análisis apuntan a la percepción rusa sobre el carácter inaceptable de la expansión de la OTAN en lo que Rusia considera su área de influencia, y de la expan-

sión de la agenda económica y democratizadora de la UE en esa misma zona. A modo de ejemplo, lo equiparan a una situación en la que una potencia militar rival a EEUU intentase integrar en su órbita a la vecindad de EEUU. Ese avance euro-atlántico es percibido por Rusia como una amenaza, como una ruptura del equilibrio y esquema de seguridad en la zona OSCE tras el fin de la Guerra Fría y le atribuye además la intencionalidad de promover cambios de régimen en el área de influencia de Rusia y, en última instancia, en la propia Rusia. Así, Rusia ha sido más favorable a un estatus neutral para Ucrania –posición de hecho favorecida por la mayoría de población ucraniana antes de los hechos del Maidán y del conflicto armado. Algunas voces en Occidente y en otros ámbitos se han mostrado también favorables a una solución de neutralidad, si bien esta posición es percibida en parte como pro-rusa por círculos mayoritarios euro-atlánticos, en un contexto de falta de autocrítica por parte de la UE sobre el rumbo de los acontecimientos así como de clara posición pro-euroatlántica de las nuevas autoridades electas ucranianas. A todo ello, algunos análisis señalan también los celos de Rusia ante un posible efecto de contagio de la senda ucraniana (protestas Maidán, derrocamiento del régimen, nuevas autoridades pro-europeas surgidas de elecciones) en su propio territorio, pese al fuerte control vertical por el Kremlin de las libertades de expresión y prensa.

Lejos de una mejora de las relaciones entre Occidente y Rusia, el malestar mutuo se incrementó durante 2014, como también las acciones interpretadas respectivamente como agresivas. Entre ellas, la anexión de Crimea por Rusia y las consiguientes sanciones por parte de Occidente; la decisión de la OTAN en 2014 de crear una fuerza de reacción rápida (transitoria en 2015 y permanente en 2016), que no tendrá base fija pero sí equipos pre-posicionados en países de Europa oriental. En respuesta, Rusia también advirtió en 2014 que revisaría su estrategia hacia la OTAN y señaló que consideraba una línea roja el ingreso de Ucrania en la OTAN –aunque analistas señalaban como poco probable en la práctica la aceptación de un potencial ingreso de Ucrania en la organización de defensa colectiva. Además, aunque Alemania –país que durante 2014 se erigió como principal puente euro-atlántico con Rusia– a través del ministro de Exteriores apuntó en noviembre a posibles nuevos enfoques que incluyesen contactos entre la UE y la Unión Euroasiática –poniendo de manifiesto la importancia de mejorar las relaciones internacionales proyectadas en el conflicto–, no se avanzó en esa dirección, y de hecho Alemania fue endureciendo también su posición hacia Rusia. Rusia, a su vez, ahondó en el discurso retórico patriótico y beligerante.

Pese al complicado clima interno e internacional, existen aún factores que podrían llevar a limitar o evitar los escenarios más negativos, incluyendo la continuación de los

Los escenarios futuros en el conflicto del este de Ucrania son preocupantes, ante el antagonismo entre las partes, la fragilidad de los acuerdos y su escasa implementación, el apoyo ruso a los grupos rebeldes y la proyección de las rivalidades entre Occidente y Rusia, entre otros elementos

canales de diálogo a través de marcos y actores aceptados por las partes, la presencia internacional en terreno (OSCE), el efecto disuasorio de los riesgos inciertos de un conflicto de mayor alcance y los focos internacionales sobre el conflicto, entre otros. En todo caso, dada la gravedad de la situación y la escasa voluntad de las partes,

hasta ahora, de implementar los acuerdos alcanzados así como el deteriorado clima de relaciones internacionales que se proyecta sobre el conflicto, las perspectivas futuras para Ucrania y sus provincias del este no invitan al optimismo y llaman a redoblar los esfuerzos de construcción de paz.

6.6. Haití: riesgo de vacío de poder y de agudización de la crisis política y social

Durante el año 2014 en Haití se agudizó la crisis política y social, con continuas manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente, Michel Martelly, y del primer ministro, Laurent Lamothe, así como con una parálisis institucional fruto del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo que culminó a mediados de diciembre con la dimisión de Lamothe y de todo el Gobierno. El catalizador tanto de las protestas como del bloqueo institucional fue la imposibilidad de celebrar elecciones legislativas y locales que se han pospuesto desde 2011 y 2010 respectivamente. Algunos analistas consideran que la situación de tensión política, polarización social e ingobernabilidad institucional en Haití puede agudizarse notablemente en 2015, puesto que el 12 de enero vence el mandato del Parlamento bicameral y ello abre la puerta a que Martelly gobierne por decreto. Ante tal escenario, la oposición ya ha anunciado su intención de convocar protestas masivas y continuadas, y la comunidad internacional ha expresado su temor de que se produzcan estallidos de violencia.²⁵

En mayo de 2012 finalizó el mandato de un tercio del Senado, y en enero de 2015 vence el mandato de un segundo tercio del Senado y de la totalidad de la Cámara de Representantes, lo cual dejaría inoperativo al Parlamento en su conjunto y provocaría una crisis de legitimidad y de vacío institucional. Ante tal perspectiva y la preocupación expresada reiteradamente por la comunidad internacional, se iniciaron conversaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Tras varios meses de desencuentros, en marzo de 2014 se logró un acuerdo histórico, facilitado por la Iglesia Católica, entre el Gobierno, el Parlamento y los principales partidos políticos para celebrar las elecciones y reducir la tensión política y social de los últimos años. Los aspectos más destacados de dicho acuerdo fueron la conformación de un Gobierno mucho más inclusivo, la creación de un nuevo órgano electoral en sustitución del Consejo Electoral Provisional, la ratificación de varias enmiendas de la ley electoral y la celebración, el 26 de octubre, de las elecciones pospuestas desde 2011.²⁶ Posteriormente se implementaron algunos de los puntos del acuerdo, como una profunda remodelación del Gobierno (la quinta desde que Martelly accedió al poder en mayo de 2011), con la incorporación de 10 nuevos ministros, algunos de los cuales cercanos a sectores de la oposición. Sin embargo, en la segunda mitad del 2014 las posiciones entre las partes se fueron alejando, con la oposición acusando al Gobierno de mala gestión y corrupción y exigiendo la dimisión del presidente y con el Gobierno acusando a seis senadores opositores de bloquear la

aprobación de las enmiendas a la ley electoral, necesaria para la celebración de los comicios.

Ante esta nueva crisis política e institucional, Martelly inició a finales de septiembre un periodo de consultas de dos meses con representantes de la oposición y de varios sectores de la sociedad haitiana. Al finalizar el mes de noviembre, sin embargo, no se había llegado a ningún acuerdo significativo y ni siquiera se habían acercado posiciones, en parte por el boicot de parte de la oposición a este periodo de consultas. Entonces, Martelly designó a una comisión consultiva de 11 personalidades para que propusieran recomendaciones con vistas a reconducir la situación y solventar la crisis. A principios de diciembre, la comisión hizo públicas sus recomendaciones, entre las que incluía la dimisión del primer ministro y las del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y los miembros del Consejo Electoral Provisional. Pocos días después, Martelly aceptó dichas recomendaciones e inmediatamente Laurent Lamothe presentó su dimisión y la de su Gobierno en bloque. A pesar de ello, la oposición señaló que las medidas incluidas en el informe de la comisión de notables le parecían insuficientes y anunció su intención de seguir liderando protestas masivas en varias ciudades del país —entre ellas las que coincidieron con la presencia en el país del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, a mediados de diciembre. De hecho, las posiciones entre el Gobierno y parte de la oposición permanecieron distantes y relativamente inmutables a lo largo del 2014. La oposición denuncia que las enmiendas a la ley electoral requeridas para la celebración de los comicios, que sí han sido aprobadas por la Cámara de Representantes, son inconstitucionales y considera que el diálogo entre Gobierno y oposición no debe restringirse a la simple resolución de la crisis institucional, sino que también abordar otras cuestiones como la liberación de personas opositoras detenidas o la propia dimisión del presidente, al que acusan de negligencia y corrupción. De hecho, la oposición considera que las iniciativas de diálogo promovidas por el Gobierno a finales de año eran puramente cosméticas y tenían la única intención de reducir la presión por parte de la comunidad internacional.

Más allá de la distancia que existe entre las posturas de Gobierno y oposición, hay otros factores que explican parcialmente la magnitud de la actual crisis política y las dificultades para hallar una solución a corto plazo. En primer lugar, cabe señalar que la crisis por la imposibilidad de celebrar las elecciones postergadas se produce en el marco de un contexto en el que confluyen varias transi-

25. Peter Granitz, "Haiti's Political Crisis Is About to Get Worse", *Foreign Policy*, 24 de noviembre de 2014, <http://foreignpolicy.com/2014/11/24/haiti-political-crisis-is-about-to-get-worse/>.

26. Poco después de la firma del acuerdo, el Gobierno hizo público que las elecciones locales se celebrarían el 28 de diciembre, mientras que la máxima autoridad electoral debería fijar la fecha de la segunda vuelta de las elecciones legislativas.

ciones y ejes de polarización. International Crisis Group, por ejemplo, señala que desde la caída de Jean Claude Duvalier en 1986, el país se halla inmerso en cinco transiciones paralelas: de la violencia armada a la paz y la reconciliación; de una cultura política antidemocrática a otra democrática; de un estado fallido a un estado-nación moderno; de un sistema con altas tasas de pobreza y desigualdad a otro con mayor justicia social; y de un país físicamente devastado por el terremoto de 2010 a otro en el que la reconstrucción sea palanca de cambio de otras transformaciones sistémicas.²⁷

En este sentido, la crisis actual acerca del vacío institucional que se podría producir a partir de mediados de enero es solamente uno de los ejes de tensión más visible que existe en el país, pero no el único, y de hecho algunos analistas consideran que puede haberse convertido en un catalizador para expresar un malestar más profundo por parte sectores importantes de la sociedad haitiana. Durante el 2014, se han producido numerosas protestas vinculadas, por ejemplo, a la mala prestación de servicios, la precaria situación económica o la situación de vulnerabilidad en la que todavía se encuentran decenas de miles de víctimas del terremoto que asoló a Haití en enero del 2010 y que provocó la muerte de más de 300.000 personas y dejó sin hogar a más de 1,5 millones de personas. A principios de año, por ejemplo, se produjeron protestas para exigir mejores condiciones socio-sanitarias o el realojo de población

en algunos de los 271 campamentos en los que, según OCHA, seguían viviendo más de 146.000 personas. Otro de los ejes que últimamente ha generado tensión en el país fueron las movilizaciones protagonizadas por simpatizantes del ex presidente Jean Bertrand Aristide a principios de 2014 para conmemorar el décimo aniversario de su salida del país, que él y sus simpatizantes consideran forzosa, o bien para protestar contra una orden de arresto dictaminada por un juez a mediados de agosto después de que Aristide no compareciera a testificar en el marco de una investigación por un caso de corrupción y blanqueo de capitales acontecido durante su presidencia. A pesar de que a finales de septiembre la orden de arresto no había sido ejecutada, el juez sí ordenó la vigilancia de la residencia de Aristide para asegurarse que éste no podía abandonar su hogar, de modo que *de facto* el ex mandatario se halla en arresto domiciliario. Esta situación provocó importantes movilizaciones por parte simpatizantes de Aristide e incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y policías en varios momentos del año. Recientemente, el país también ha vivido importantes y violentas manifestaciones vinculadas a las demandas por parte de ex militares de recibir compensaciones por parte del Estado o de restablecer el Ejército –desarticulado por Aristide a mediados de los años noventa– o bien a la pre-

sencia en el país de la misión de la ONU MINUSTAH, que en varias ocasiones ha sido acusada de parcialidad política (en contra de los sectores más cercanos a Aristide), de perpetrar varios abusos y violaciones de los derechos humanos, de ser considerada una fuerza de ocupación y no una misión de mantenimiento de la paz o de haber reintroducido el cólera en el país, provocando la muerte de miles de personas.

Otro factor que obstaculiza la perspectiva de una salida pacífica y negociada a la crisis es que ésta se enmarca en un contexto de enorme polarización política y social, de enfrentamiento y desconfianza entre los poderes del Estado y de prácticas políticas que han primado la confrontación por encima del consenso. En efecto, desde el regreso de Aristide al poder a mitad de los años noventa tras el golpe de Estado militar que lo derrocó, todos los presidentes haitianos han vivido movilizaciones masivas lideradas por la oposición. Algunas de ellas han forzado la renuncia del presidente, como es el caso de Aristide en 2004, mientras que otras han erosionado significativamente la legitimidad del presidente, como en el caso de René Préval, o del Gobierno. Cabe señalar que desde el año 2006 hasta finales de 2014, ha habido siete personas que han ocupado la jefatura del Gobierno (ocho si se cuenta a la que sustituirá a Lamothe). En la situación actual, una parte significativa de la oposición ya ha anunciado su intención de liderar movilizaciones sociales hasta lograr la renuncia de

Martelly. Fanmi Lavalas, por ejemplo, el partido fundado por Aristide y una de las formaciones políticas con mayor capacidad de movilización en todo el país, acusa al Gobierno de persecución política, por lo que rechaza cualquier diálogo como mecanismo de resolución de la crisis y apuesta por la movilización ciudadana como instrumento para superar la situación actual.

En cuanto a la desconfianza entre los poderes del Estado, cabe recordar que Martelly no cuenta con un apoyo parlamentario importante, lo cual suele generar problemas para aprobar la legislación que sustente la acción de gobierno. A modo de ejemplo, Laurent Lamothe fue la cuarta propuesta a ocupar el cargo de primer ministro que hizo Martelly (dos de ellas no fueron aceptadas y la tercera dimitió a los pocos meses de haber sido nombrado), lo cual provocó un prolongado periodo de parálisis gubernamental. Casi ninguno de los presidentes de las últimas cinco décadas lo ha sido en representación de una formación política estable, sino encabezando alianzas electorales con intereses a menudo a corto plazo. Ello denota la fragilidad y volatilidad del sistema de partidos y la tendencia de ocupar este vacío a través de figuras carismáticas con capacidad para tejer alianzas electorales. La desconfianza que ha afectado a las relaciones entre la

27. International Crisis Group, *Governing Haiti: Time for National Consensus*, Latin America/Caribbean Report N°46, 4 de febrero de 2013, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/haiti/046-governing-haiti-time-for-national-consensus.aspx>.

Presidencia y el poder legislativo desde la llegada al poder de Martelly también ha sido alimentada por el incumplimiento de acuerdos anteriores (dos de los ejemplos más recientes son el acuerdo de diciembre de 2012 para reformar el Consejo Electoral Provisional o el acuerdo de marzo de 2014 sobre la celebración de las elecciones pospuestas), las acusaciones del Gobierno a la oposición de que intenta conseguir a través de la inestabilidad política y social lo que no está seguro de lograr en las urnas o bien las sospechas por parte de la oposición de que Martelly, ante un Parlamento que no le es afín, en realidad hace tiempo que persigue y prepara una situación idónea para gobernar por decreto, como la que podría producirse en el caso de que expire el mandato del Parlamento a mediados de enero de 2015. Además, varios analistas se han hecho eco de los temores que tiene la oposición acerca de las intenciones de Laurent Lamothe de presentarse a las elecciones presidenciales previstas para finales de 2015, así como de las maniobras de Martelly para promocionar estos intentos por parte Lamothe, amigo personal suyo.

Por otra parte, el enfrentamiento abierto entre los poderes ejecutivo y legislativo también acaba afectando al establecimiento y la consolidación de la institucionalidad democrática del Estado. Tras varias décadas de férreas dictaduras, la Constitución de 1987 quiso evitar cualquier concentración de poder en el Ejecutivo y diseñó importantes mecanismos de reparto y equilibrio de poderes, de modo que el diseño y funcionamiento de algunas de las principales instituciones del país dependen de la concertación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Así, por ejemplo, el bloqueo de algunos organismos como el Consejo Electoral Permanente, el Consejo Superior del Poder Judicial o un Consejo Constitucional (separado de la Corte Suprema) sin duda está vinculado a la relación conflictiva que han tenido el Gobierno y el Parlamento en los últimos años. La debilidad de las instituciones democráticas del Estado no solamente es consecuencia del crónico enfrentamiento político en Haití, sino que a su vez también acaba agudizando el conflicto y socavando la legitimidad y la capacidad de algunas de estas instituciones para arbitrar en la crisis política. A modo de ejemplo, la falta de consenso acerca de la composición y funciones de un nuevo organismo electoral que sustituya al que funciona desde hace años de manera

interina y provisional está estrechamente vinculado con la frecuencia con la que se han pospuesto elecciones en Haití en los últimos años, con la baja participación sistemática o con las numerosas controversias que se han producido últimamente (publicación de resultados, organización logística de la jornada electoral, admisión y publicación de candidaturas, etc.).²⁸

Ante toda esta situación, la comunidad internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por el futuro inmediato del país, como así lo denotan el intento de la Embajada de EEUU de facilitar el diálogo entre Gobierno y oposición a finales de 2014 o bien la organización de una conferencia internacional en El Vaticano en enero de 2015 acerca de la situación humanitaria de Haití cinco años después del terremoto. Además, en los últimos meses se han producido algunos signos esperanzadores acerca de la capacidad de diálogo y acuerdo entre las partes, como el pacto facilitado por la Iglesia de marzo de 2014, la ronda de conversaciones que llevó a cabo Martelly con varios representantes políticos y sociales o la aceptación por parte del propio presidente de las recomendaciones que elaboró una comisión de personalidades

para superar la actual crisis. En este sentido, aunque a finales de 2014 todavía estaban por ver los efectos que la dimisión de Lamothe y de su Gobierno tenía en la crisis política, algunos analistas consideran que podría tener una repercusión claramente positiva. De todos modos, la perspectiva de que en el año 2015 puedan coincidir todas las elecciones posibles en Haití (Senado, Cámara de Representantes, locales y presidenciales) tampoco parece favorecer el clima de diálogo y concertación necesario para solventar el actual *impasse*, puesto que algunas de las manifestaciones más importantes que se han vivido en el país en los últimos tiempos han coincidido con la celebración de elecciones. Además, las condiciones de inestabilidad estructural en la que se enmarca la actual crisis, la debilidad institucional del país, el enfrentamiento permanente entre poderes del Estado, la negativa de parte de la oposición a entablar un diálogo con el Gobierno, la acusaciones de mala gestión al Gobierno de Martelly y las continuas y crecientes movilizaciones en las principales ciudades del país, que ya han provocado varios episodios de violencia en los últimos meses, tampoco favorecen un ambiente propicio para resolver la crisis.

La situación de tensión política, polarización social e ingobernabilidad institucional puede agudizarse notablemente en 2015, puesto que el 12 de enero vence el mandato del Parlamento y ello abre la puerta a que Martelly gobierne por decreto

28. Clare Lockhart, Johanna Mendelson Forman, "Why Haiti Needs a National Dialogue", *Foreign Policy*, 28 de julio de 2014, <http://foreignpolicy.com/2014/07/28/why-haiti-needs-a-national-dialogue/>.

6.7. La expansión de al-Shabaab en Kenya, ante las puertas de un nuevo conflicto armado

La operación militar por parte de las Fuerzas Armadas de Kenya en Somalia iniciada en octubre de 2011, con el argumento de la necesidad de frenar la amenaza del grupo armado islamista somalí al-Shabaab para evitar la expansión de sus actividades más allá de las fronteras de Somalia, ha comportado un incremento de la violencia y de los ataques de al-Shabaab y de grupos afines a la insurgencia islamista en Kenya. Desde 2013 alrededor de 200 personas han muerto como consecuencia de estas acciones en Kenya. La operación militar de Kenya en Somalia, sumada a las actividades militares que ya desempeña desde 2006 el considerado enemigo tradicional somalí, Etiopía, y también EEUU, ha contribuido también a justificar la razón de existencia de al-Shabaab, la lucha contra las tropas extranjeras en Somalia. En paralelo y como consecuencia de ello, el Gobierno de Kenya, en el marco de su política antiterrorista para frenar esta oleada de violencia, ha incrementado la presión contra la comunidad somalí en Kenya, presión que no solo ha contribuido a alimentar un caldo de cultivo favorable en el entorno de la comunidad somalí de apoyo a al-Shabaab y de rechazo hacia las instituciones y cuerpos de seguridad de Kenya, sino también a aumentar el sentimiento antisomalí en este país. La situación actual es cada vez más explosiva para el que hasta el momento había sido uno de los países más estables en la región tras haber superado el episodio de violencia post electoral de 2008 y una de las economías más dinámicas del este de África.

Desde el inicio en octubre de 2011 de la operación keniana Linda Nchi (en swahili, Protege el País) contra al-Shabaab en territorio somalí, en coordinación con las Fuerzas Armadas etíopes y las Fuerzas Armadas somalíes, se ha producido una intensificación de la violencia en Kenya. La ocupación militar del sur de Somalia por parte de Kenya estuvo motivada por el deseo de crear una zona tampón que evitara que el conflicto en Somalia trascendiera más allá de sus fronteras. Pronto se vio que la operación, que en un principio parecía pretender solamente alejar a al-Shabaab de la frontera, adquiriría un cariz de guerra convencional de ocupación de carácter permanente. Hasta el momento, Kenya no se había visto afectada por el conflicto que padece su país vecino. Desde la caída de la Unión de los Tribunales Islámicos en 2008, su brazo armado, al-Shabaab, había tomado el control del centro y sur del país, acercándose a Kenya, pero no se habían producido ataques directos contra intereses o población kenianos.

Tres años después del inicio de la intervención militar en Somalia, Kenya no ha elaborado una estrategia real de salida del conflicto ni ha justificado suficientemente la persistencia de esta operación

Sin embargo, el Grupo de Supervisión sobre Somalia y Eritrea²⁹ ya en junio de 2011 había identificado a redes autóctonas, principalmente en Kenya, implicadas en actividades de reclutamiento, radicalización y movilización de recursos en nombre de al-Shabaab fuera de Somalia. Además, destacaba que esta tendencia, puesta de manifiesto con los atentados de Kampala en julio de 2010, indicaba no sólo que al-Shabaab tenía la voluntad y la capacidad de llevar a cabo este tipo de ataques, sino que estaba dando lugar a una nueva generación de grupos yihadistas en África oriental. Si hasta 2011 al-Shabaab no había llevado a cabo acciones en Kenya se debía, según diversos analistas, al hecho de que este país era considerado una retaguardia segura. En el pasado, la presencia de al-Shabaab en Kenya se concentraba principalmente en la comunidad étnica somalí. Sin embargo, desde 2009 el grupo amplió su influencia y captó nuevos miembros entre ciudadanos de Kenya de origen no somalí, los cuales, según las estimaciones del Grupo, constituyen en la actualidad el grupo no somalí más grande y estructuralmente mejor organizado dentro de al-Shabaab. En ese mismo año Kenya empezó a reclutar y entrenar milicias progubernamentales somalíes, y a inicios de 2011, al-Shabaab amenazó a Kenya por esta cuestión. Durante el año 2011 se produjeron diversas acciones y ataques en la zona fronteriza por parte de al-Shabaab lo que, sumado al secuestro y asesinato de turistas y trabajadores humanitarios en Kenya, de los que se responsabilizó a al-Shabaab (aunque la autoría no estuvo clara), dio alas a los sectores más militaristas para que en octubre de ese mismo año se iniciara esta operación militar. En marzo del 2012 Kenya anunció la integración del contingente militar en la AMI-SOM, decisión que se hizo efectiva en junio. No obstante, tres años después del inicio de la intervención militar, el Gobierno keniano no ha elaborado una estrategia real de salida del conflicto ni ha justificado de forma suficiente la persistencia de esta operación.³⁰

En paralelo, se produjo una creciente proliferación de acciones en diversas partes de Kenya –en el suburbio de Eastleigh (Nairobi) conocido como el pequeño Mogadiscio, en Mombasa y en localidades del norte y noreste del país (Garissa, Wajir, el campo de refugiados de Daadab y la zona fronteriza de Mandera)– pero fue, sobre todo, el atentado de Westgate, en Nairobi, entre el 21 y el 24 de septiembre de 2013, el que significó un punto de inflexión en la percepción del país sobre la amenaza del grupo islamista. Este atentado en un complejo comercial

29. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 1916 (2010) del Consejo de Seguridad*, 18 de julio de 2011, S/2011/433.

30. Boru Halakhe, Abdullahi, "To prevent more Mpeketonis Kenya must define Somalia exit plan", *African Arguments*, 19 de junio de 2014.

de un barrio acomodado de la capital, Westlands, causó la muerte de 67 personas y otras 175 resultaron heridas. No obstante, el asedio durante tres días, el caos y el descontrol de la situación, la captura de rehenes y la notoriedad de algunas de las víctimas –entre las cuales, 19 extranjeros de diversas nacionalidades, un familiar del presidente del país, una importante periodista keniana embarazada, un diplomático canadiense y un poeta y diplomático ghanés– lo convirtió en el peor ataque en Kenya desde el que sufrió la embajada de EEUU en Nairobi en 1998, en el que murieron 200 personas. Ese atentado significó el inicio de importantes cambios a nivel internacional por la percepción de la amenaza de la insurgencia islamista a nivel global. Los sucesivos atentados durante el año 2014 (entre los más destacados, Mpeketoni y Poromoko, en junio, que causaron 60 víctimas mortales, o Mandera, en noviembre, alrededor de 40 víctimas mortales) han provocado un clima de psicosis de inseguridad y alertas de las embajadas occidentales hacia el turismo y la reducción del personal imprescindible. Esta situación ha repercutido en una de las principales fuentes de ingresos del país, por el grave impacto en el sector del turismo, con una caída abrupta de las llegadas de turistas, miles de despidos y cierres de hoteles en la costa. El Gobierno interpretó esta reacción como un intento de perjudicar el turismo en el país e inició un discurso populista antioccidental al que unió las críticas contra la acción de la CPI contra el presidente Uhuru Kenyatta y contra su primer ministro, William Ruto, por su responsabilidad en la violencia post electoral de principios de 2008.

Estas acciones bélicas de al-Shabaab en Kenya provocaron una dura respuesta por parte del Gobierno para intentar recuperar el clima de seguridad y la credibilidad nacional e internacional, pero ésta a la vez desencadenó un clima de miedo y desconfianza en la sociedad, al llevar a cabo medidas que significaban un castigo colectivo contra la comunidad somalí en Kenya, puesta bajo sospecha en su conjunto. Entre las medidas, la iniciativa Nyuma Kumi (en swahili, Conoce a tu Vecino), consistente en dividir las casas en grupos de 10 y convertir a la vecindad en informante y vigilante de actividades sospechosas, se ha demostrado ineficaz y ha sido duramente criticada por numerosos analistas. A la vez, en abril de 2014 el Gobierno lanzó la Operación Usalama Watch, que pretendía verificar y detectar la existencia de inmigración ilegal, arrestar a sospechosos de participación en actividades terroristas y frenar la criminalidad en general. Alrededor de 4.000 somalíes fueron retenidos y trasladados en condiciones inhumanas y degradantes al estadio de Kasarani, lo que desencadenó duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y el propio Gobierno de Somalia. Como resultado, al menos 300 personas fueron

deportadas, pero ello no ha significado una mejora en el clima de seguridad y ha afectado gravemente a las relaciones entre la comunidad somalí y el Gobierno de Kenya. Aunque al-Shabaab se identifica como un grupo somalí, como organización salafista-wahabita no reconoce las fronteras del Estado nación y habitualmente hace llamamientos a la comunidad musulmana del Cuerno de África –más que a la población somalí–, que en Kenya incluye a 4,3 millones de personas, un 11% de la población, cifra que dobla la población somalí en Kenya, estimada en 2,4 millones de personas, según el censo de población de 2009. No obstante, sólo una parte de la comunidad musulmana en Kenya sigue el credo wahabita procedente de Arabia Saudita, según International Crisis Group,³¹ lo que podría situarla en la órbita de al-Shabaab, mientras que el resto de sectores musulmanes de Kenya siempre han estado más cercanos al poder, por lo que se oponen a esta tendencia. En este sentido, además, al-Shabaab ha intentado movilizar las fracturas religiosas y étnicas, y los agravios sociales y económicos en el país para ahondar en la división política, especialmente en la costa, donde el mismo Gobierno en algunos momentos ha acusado al movimiento Mombasa Republican Council o a grupos vinculados a la criminalidad de estar conectados a los atentados, con el objetivo de desviar la atención a los graves déficits de seguridad. Las acciones del Gobierno contra organizaciones musulmanas

en Mombasa, como la Muslim Youth Centre (MYC) y el asesinato de su líder, así como la nueva ley antiterrorista aprobada en 2012, provocó la oposición de organizaciones musulmanas y grupos de derechos humanos al considerarla discriminatoria, alimentando un sentimiento antigubernamental también entre sectores de la comunidad musulmana del país. Las periódicas represalias contra la comunidad musulmana somalí y la respuesta xenófoba que se ha desencadenado tras diversos episodios contribuye a alimentar el respaldo a las acciones de al-Shabaab y sus aliados.

Aunque las acciones militares de la comunidad internacional han debilitado al grupo islamista en Somalia, la principal amenaza de al-Shabaab es la división interna entre el yihadismo internacional y el nacionalismo somalí: de ser residual, la primera se ha convertido en preponderante, y el líder ejecutado en septiembre, Ahmed Godane, era un ferviente partidario de la facción internacionalista, habiendo ejecutado a líderes opositores, expulsado o reducido el poder de los sectores más nacionalistas, por lo que al-Shabaab en la actualidad es, de facto, un movimiento yihadista transnacional.³² Su sucesor, Ahmed Omar (también conocido como Abu Ubaidah), ha seguido con la misma retórica. Así, al-Shabaab, aparte de por la invasión y ocupación de Somalia (como parte del mundo musulmán) por parte

Las periódicas represalias contra la comunidad musulmana somalí y la respuesta xenófoba que se ha desencadenado tras diversos episodios contribuye a alimentar el respaldo a las acciones de al-Shabaab y sus aliados

31. International Crisis Group, *Kenya: Closer to Home*, International Crisis Group, Africa Briefing N°102, 2014.

32. Boru Halakhe, Op. cit.

de las Fuerzas Armadas de Kenya, está justificando sus ataques en Kenya por la opresión sobre la población musulmana en el país, la intimidación y las ejecuciones extrajudiciales que está sufriendo la población musulmana. En consecuencia, es imprescindible reconsiderar la política de Kenya hacia Somalia y sus esfuerzos de lucha contra la insurgencia somalí al-Shabaab, la políti-

ca hacia la comunidad musulmana en Kenya y hacia la comunidad somalí en el país ya que, a pesar de haber contribuido a un debilitamiento de las actividades y el poder de al-Shabaab en Somalia, ha significado la emergencia del grupo en Kenya y un creciente factor de inestabilidad y de violencia que puede tener consecuencias todavía más graves en un futuro cercano.